



FPMR: DEFINICIONES PARA UN NUEVO PROYECTO POLITICO **Proceso de discusión interna del Rodriguismo. (PDI 2000).**

40 páginas.

El proceso de discusión interno es el camino por el cual la organización ha transitado en este último tiempo, con el objetivo de enfrentar y superar mediante formas nuevas los problemas que nos han puesto en la más grave crisis de nuestra historia.

Han transcurrido 17 años desde que el Frente irrumpió como la fuerza llamada a ocupar un papel destacado en la lucha de nuestro pueblo. Prácticamente trece de ellos los ha recorrido en forma autónoma. El camino no ha sido fácil. Hemos enfrentado la pérdida de numerosos y valiosos cuadros; la detención de otros tantos, en medio de una situación política compleja y adversa, marcada por un cambio cualitativo en el orden mundial y por el tránsito de los gobiernos militares a pseudodemocracias en América Latina, que construyeron las bases para imponer el más brutal sistema neoliberal de explotación de los tiempos modernos y que en la actualidad arrastra a millones a la extrema miseria.

A lo largo de nuestro desarrollo hemos enfrentado un conjunto de problemas propios de la lucha revolucionaria, derivados en una primera etapa por la lucha antidictatorial y luego en medio de una democracia burguesa en el contexto de un mundo unipolar.

A través del tiempo, la insuficiente capacidad para resolver oportunamente los problemas de fondo fue generando una acumulación de los mismos, que en medio de una situación política interna y externa nos hizo entrar en una dinámica de crisis. Al margen de sus formas de expresión, y más allá de sus interpretaciones, ésta nos ha llevado a una debilidad que impide abrir paso a los objetivos patrióticos y revolucionarios que dieron origen y constituyen la esencia del ideario rodriguista.

Enfrentados a esta realidad, es nuestra obligación buscar las raíces que nos permitan la transformación del Frente y ponerlo a la altura de las exigencias de la situación presente y futura, para cumplir con el rol histórico que le corresponde en la conquista de la plena y auténtica liberación de nuestra patria.

La situación por la que atraviesa nuestra organización no es más que el resultado de la aplicación de sus políticas, la cual conjuga éxitos y reveses, avances y retrocesos. Pero sin lugar a dudas tiene un saldo positivo, que nos permite ser una realidad, a pesar de errores, golpes y el asedio de un sistema dispuesto a destruirnos en medio de una ofensiva de las fuerzas más reaccionarias destinadas a cerrar el paso a la esperanza y la posibilidad de que los pueblos sean dueños de sus destinos.

Sin embargo, la sola existencia no es suficiente. Para transformarse en una alternativa real es necesario contar con un proyecto que represente fielmente los intereses de los desposeídos tanto desde el punto de vista táctico como estratégico y que les permita ser protagonistas de su propia historia.

El FPMR, con una historia de heroísmo, cuenta con el capital necesario para constituirse en una de las fuerzas de vanguardia, pero ello será posible en la medida que sea capaz de descubrir y superar todo aquello que ha impedido su desarrollo. Por tanto, sólo al calor de nuestra historia podremos entender y reconocer las verdaderas causas.

DOCUMENTO CENTRAL

INTRODUCCION

El siguiente documento pretende valorar la realidad política internacional, nacional e interna del FPMR y contiene una propuesta sobre nuestro nuevo pensamiento político que guarda correspondencia con esas realidades evaluadas. Caracterizamos este trabajo sólo como un instrumento y guía, tratando de hacer participar a todos los militantes de una discusión seria y fecunda sobre lo que debería ser la línea de pensamiento y acción del Frente para la época actual y un futuro inmediato. Con este esfuerzo colectivo intentamos terminar nuestro largo proceso de discusión y crisis interna, y al final del mismo, aspiramos a construir al menos las bases de un Proyecto, y sus políticas particulares, es decir una plataforma de lucha que nos conduzca y oriente en estos complejos y difíciles momentos que vive toda la izquierda y el movimiento revolucionario en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo.

El PDI, entendido desde su origen como un proceso dinámico de análisis reflexivo y de una nueva forma de práctica política, ha tenido hitos que han confirmado su validez. Así hemos podido descubrir las causas más determinantes de la crisis y con menor éxito hemos intentado construir los instrumentos para superarlas. El objetivo ha sido levantar una organización revolucionaria que en su desarrollo logre colocar una alternativa política popular en el plano nacional. La realidad actual de nuestra organización expresa inobjetablemente cuánto camino falta por recorrer para ese cambio y principalmente para la construcción de esa nueva alternativa revolucionaria. En algunos momentos se pensaba en una “revolución” de nuestras conciencias que abriera paso a un acelerado y profundo salto de calidad en la transformación. El tiempo nos ha ido enseñando que el cambio seguirá y será esencialmente un proceso, y en ese sentido debemos comprender que la caracterización de “fin del PDI” es únicamente una fórmula organizativa que nos permita seguir avanzando de una manera más coherente y constructiva. Este camino debe potenciar y optimizar las capacidades de todos los que componen nuestra militancia y entorno. Se debe tener la valentía de revisar y discutir luchando contra dogmas que idolatramos durante décadas, aunque hoy estemos igualmente expuestos a ser permeados por nuevos dogmas. Lo distinto será desatar toda esa traba antidemocrática, sectaria, mesiánica y soberbia de nuestra organización.

Tanto el desarrollo del PDI como la práctica cotidiana han permitido que se cumplan aunque sea de forma parcial algunos objetivos fundamentales que nos trazamos. Se han desarrollado las bases generales de un nuevo pensamiento aunque carente de importantes definiciones que apunten a concentrar con mayor claridad los esfuerzos principales para toda esta etapa que comienza. A pesar del estado general de involución, pérdida de valores y degradación política que impera en nuestro país, hemos logrado mantener el ideario rodriguista, lo que nos ha permitido sobrevivir en estas complejas condiciones. Independientemente a las reincidencias y resistencias de las concepciones de “aparato”, es una realidad que hemos tendido hacia una horizontalidad de la estructura, a la participación democrática y a la inserción y pertenencia a los sujetos sociales. En definitiva tenemos todas las posibilidades objetivas de transformarnos en una organización política.

Compañeras y compañeros:

Una de las condiciones indispensables para el éxito del final del PDI, es la total participación de cada militante en las tareas relacionadas con el diseño y el plan complementario para esta etapa a la que hemos definido como una jornada de profundización ideológica que descubra nuestras potencialidades, que cohesione nuestro pequeño contingente de militantes, impulsando la reconstrucción del rodriguismo y sus estructuras, para asumir las tareas que el nuevo pensamiento y sus políticas particulares defina. Debemos tender a la formación de un nuevo militante, integral y revolucionario. Si no somos capaces de poner en práctica de manera cotidiana valores esenciales de los revolucionarios, difícilmente seremos capaces de hacerlo en una dimensión social. Esto no será un hecho mecánico o espontáneo, sino que debe existir disposición, voluntad de cambio, junto con dedicación, compromiso y responsabilidad con la autoformación principalmente, pero no únicamente, de todos aquellos que ocupan algún cargo en la organización. La responsabilidad, la sistematización en el estudio, la creatividad, la disposición al trabajo y la iniciativa política adquieren en este período una importancia crucial, a tal punto que pueden ser elementos que determinen el éxito o no del proceso de discusión. Es imprescindible la calidad política del militante rodriguista, ya que por él y su práctica pasa sustancialmente el logro de los objetivos propuestos.

Llamamos a todos los militantes a asumir con la mayor disposición las tareas que emanen del diseño de finalización de este proceso de discusión. Todos los colectivos sin excepción deben participar en este trabajo, que se transforma en una gran jornada de aprendizaje. El debate profundo, democrático, en todos los ámbitos, debe ser el oxígeno que revitalice cada jornada de estudio. Cada militante tiene mucho que decir, mucho que aportar. En cada uno de nosotros hay un cúmulo de experiencias, de diversas formas de enfrentar el trabajo y de hacer política. Entreguémonos con generosidad a levantar nuestra organización, a rescatar el ideario rodriguista para proyectarlo como un aporte a la lucha popular en el siglo XXI.

Parte Primera: LA SITUACIÓN INTERNACIONAL GENERALIDADES

En el nuevo siglo que comienza la humanidad está obligada a lograr la sensatez necesaria para salvarse o irremediablemente sucumbirá ante las consecuencias de una sociedad y un sistema autodestructor y global que como fin último no busca la felicidad y el bienestar del ser humano, sino el enriquecimiento infinito de una minoría, que obliga a un consumismo ilimitado, devasta el entorno y forja a un ser elitista, miserable en su espíritu, apático y egoísta en su conducta, que no reaccionará hasta tanto los dramas del mundo no amenacen con destruir su forma de vida más inmediata y su propia seguridad. En la historia de los pueblos, eminentes personajes humanitarios y sabios han jugado significativos papeles para lograr el bienestar de los hombres y mujeres del mundo, pero está demás demostrado que es la lucha de segmentos organizados de la sociedad el principal instrumento o medio para alcanzar cambios trascendentes.

La sociedad mundial vive agobiada por contradicciones que bajo el actual orden aparecen como insolubles. La humanidad crece numéricamente de una forma acelerada y desigual. Los principales conflictos y fenómenos incontrolables nacen de una profundización de la brecha entre países ricos y países pobres, entre un primer mundo plétorico de modernidad y una periferia tercermundista llena de carencias y destinada a vivir para los primeros. La pobreza y los conflictos de toda índole que ella genera —independiente a su carácter— son considerados una amenaza y producen inquietud en los poderosos. Las crisis económicas intrínsecas e involuntarias del sistema —contenidas con paliativos temporales— son otra fuente

de incertidumbres y temores. A través de siglos se han venido destruyendo y agotando los recursos del planeta pero sólo en los últimos treinta años, casi un tercio de la riqueza natural de la tierra se ha perdido inexorablemente. Esta destrucción lenta y segura del ecosistema será tal vez en las próximas décadas, uno de los principales factores de conflictos mundiales. Las luchas por la repartición de los recursos naturales entre los países poderosos y sus bloques, de no llegar a fórmulas de consenso, pueden llegar a ser una fuente de gran desestabilización y enfrentamiento a escala global. Y esto es así porque la mundialización de cualquiera de esos conflictos está determinada por la objetiva internacionalización de los procesos políticos, sociales, económicos y culturales a escala regional y planetaria que se ha experimentado en los últimos años, en el que ha sido determinante una explosiva y vertiginosa revolución científico técnica (R.C.T.) que ha tornado al mundo cada vez más interdependiente.

Ha quedado suficientemente demostrado por el comportamiento de las potencias en diversos momentos históricos que cualquiera de esas inestabilidades, crisis e incertidumbres, el primer mundo puede pretender solucionarlas empleando la guerra, absolutamente despreocupado del costo humano, social y ecológico. Por el contrario, la guerra es un excelente momento de consumo de bienes y recursos militares que le otorgan el dinamismo necesario al Complejo Militar Industrial que está articulado a las economías industrializadas del primer mundo y principalmente a la de los EEUU.

De estas consideraciones generales se desprende que nuestra organización, teniendo un estricto arraigo nacional, es consciente de la imposibilidad de consolidar los objetivos de un proyecto a escala local sin tener en consideración las determinantes influencias de los acontecimientos y correlación de fuerzas a nivel regional e internacional. En este nuevo siglo el país estará irremediamente bajo el influjo de cualquiera de esos posibles escenarios de contradicciones mundiales. Esto no determina ni influye de forma directa en las tareas y trabajos de la organización en toda su etapa de acumulación política y social, de inserción paciente en la población, clase obrera y sectores más combativos. Las labores de organización y acumulación pueden realizarse en medio de una relativa independencia de la situación internacional. Pero lo más probable es que en directa relación con la agudización de los conflictos nacionales, en futuras etapas de crisis, estos se conviertan en una amenaza para los intereses políticos y/o económicos del primer mundo. El factor internacional jugará entonces, un papel determinante en el éxito o fracaso de cualquier proceso de transformaciones sustanciales en el país, independientemente de quién lo conduzca.

PANORAMA INTERNACIONAL

La consolidación de un Nuevo Orden Mundial, la globalización y el neoliberalismo son procesos simultáneos e imbricados que analizados separadamente y en sus interdependencias caracterizan la situación mundial actual. Contradictorias y complejas son las transformaciones que ha experimentado el orbe al final del milenio, pero es inobjetable que el escenario mundial que se dibuja es significativamente diferente al de los decenios precedentes. En los últimos cincuenta años la ciencia y la técnica avanzó más que en varios siglos anteriores, aunque esto esté lejos de significar que la humanidad en conjunto pueda disfrutar de sus beneficios. El desarrollo científico-técnico ha tenido un sentido y somos conscientes que vivimos un período histórico en el cuál la sociedad capitalista mantiene su más profunda esencia de explotación de los asalariados. No se ha terminado con las clases ni con sus profundas contradicciones, ni con sus luchas, pero hoy día la muy conocida división sociológica entre explotadores y explotados está muy lejos de explicar la compleja subjetividad y posible sentido de pertenencia a una clase de los hombres del tercer milenio. De esta forma, lo que vivimos no significa ruptura total

con los tiempos precedentes. Para más de dos tercios de la humanidad “los cambios” no son sinónimo de transformaciones en su vida inmediata y menos aun de progreso; por el contrario en medio de ancestrales miserias asisten conscientes o ignorantes al fenómeno sin experimentar una mejoría en su calidad de vida. Como ejemplo, podemos decir que existen medicinas y técnicas para curar o paliar múltiples enfermedades, pero la mayoría de los necesitados no pueden acceder a ellas. Hoy día existen tantos tuberculosos como a principios del siglo pasado cuando aun no se conocía su cura. El 95% de los infectados de SIDA se encuentran en los países subdesarrollados, pero las terapias más avanzadas apenas dan alivio al 10% de los infectados que se encuentran en las regiones desarrolladas y que pueden pagar los costosos tratamientos. Se calcula que el VIH puede devenir una de las cinco primeras causas de muerte a nivel mundial en las próximas décadas. La carrera espacial no deja de sorprendernos día a día, pero gran parte de la humanidad aun se traslada a pie o con tracción animal. Un dato paradójico ilustra la verdadera posibilidad de acceso de la humanidad a la R.C.T.: en todo el continente africano existen menos teléfonos que en el puro barrio de Manhattan en Nueva York. Esa es la modernidad sesgada y profundamente injusta que nos muestra el mundo actual.

Pero hoy existe una diferencia cualitativa con el pasado: el actual modelo capitalista ha profundizado y distanciado la posibilidad de integrar a esa mayoría a los beneficios que contienen las transformaciones que está experimentando el orbe. Inclusive el propio concepto de progreso y modernidad para el tercio de humanidad que se beneficia con ella es profundamente cuestionable al descubrir los contenidos, calidad y consecuencias de tal “desarrollo”.

CARÁCTER Y CONTENIDO DE LOS CAMBIOS.

Asistimos a la consolidación de un nuevo orden mundial donde los EEUU, como gran potencia imperial militar —y sin contrapesos en este terreno—, se ha erigido en gendarme planetario. Desapareció el orden mundial que predominó desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de la década de los setenta. Fue al término de esa guerra que EEUU emergió como la potencia económica y militar dominante a escala mundial consolidando su carácter de estado imperial. El nuevo Imperio desarrolló aceleradamente su industria, el comercio y la inversión extranjera, y posterior a los acuerdos de Breton Wood (EEUU) en 1944 impone un nuevo sistema monetario internacional con el dólar como moneda dominante. Hasta la década de los setenta, EEUU ejerce el dominio absoluto en el mundo capitalista unido a un acelerado desarrollo de las empresas transnacionales con la participación decisiva de los llamados Estados Interventores en lo que se conoció como Capitalismo de Estado. Impulsa la creación de la OTAN (1949) e integra a Europa Occidental bajo su liderazgo. Al mismo tiempo, le impone a la desaparecida URSS y al mundo una costosa carrera armamentista sustentada en la supuesta amenaza soviética. Son los tiempos de la guerra fría, de la lucha entre dos sistemas antagónicos.

A comienzos de la década de los 70 se hunde el sistema monetario internacional. Las economías nacionales de Europa Occidental y de Japón habían crecido hasta el punto que sus propias monedas empezaban a superar al dólar, y esto debido a que en las décadas siguientes a la Segunda Guerra, estos estados se concentraron casi exclusivamente en las funciones económicas, mientras los EEUU —que dividía sus energías entre sus intereses económicos y su rol de líder político-militar en la cruzada anticomunista- entraba en una profunda crisis y mostraba la declinación relativa de su poder económico, en gran medida como consecuencia de las profundas contradicciones de su economía interna. También por entonces, casi un tercio de la humanidad se hallaba bajo la influencia de modelos socialistas en una disputa permanente por áreas de influencia entre la ex URSS y China.

Al finalizar esa década y antes de la desaparición del socialismo soviético, ya se dibuja un nuevo orden mundial medianamente organizado con tres grandes líderes en una disputa permanente por sus respectivas “áreas grandes” de influencia: EEUU con América, Alemania con Europa y Japón con Asia. Esta nueva tendencia de reparto económico es uno de los rasgos que distinguen el actual orden mundial, existiendo hoy sólo China como influencia de un modelo socialista. Es previsible que en este escenario, Japón y Europa luchan para no ser absorbidos por EEUU, y que en directa relación con la pérdida de su hegemonía económica, dicho país tienda al uso de la fuerza para mantener su dominio. Quizás también este orden mundial se vea alterado en este siglo por el surgimiento de China como potencia económica, produciendo un nuevo reordenamiento de la correlación de estas fuerzas internacionales. Tampoco deben descartarse polos de poder en Rusia, India, y los países musulmanes, cada uno enraizado en su estilo de civilización.

Para la década de los 80 quedan establecidas las normas y dogmas de la reorganización capitalista a escala planetaria siendo los EEUU e Inglaterra (en la llamada “Era Reagan-Teatcher”) los propulsores del modelo neoliberal en el mundo desarrollado. Desde entonces, los organismos financieros internacionales condicionan sus préstamos e inyecciones de urgencia para los países tercermundistas y subdesarrollados exigiendo desregulación, equilibrio de las economías internas, disminución del gasto social, privatización absoluta, no-intervención por parte de los estados, un total libre mercado eliminando todo tipo de barreras al comercio y libertad sin límites al flujo de los capitales financieros. Por el contrario, para el primer mundo y sus empresas transnacionales regirán criterios como la privatización dirigida, el proteccionismo con diversos ropajes, el mercado regulado con intervención del estado, y la producción e inversión planificada y controlada por las grandes empresas transnacionales.

El neoliberalismo resume así la nueva correlación de fuerzas a escala nacional e internacional. Es el modelo hegemónico que nace para reactivar el capitalismo a escala mundial dando inicio a un nuevo largo ciclo de acumulación y expansión del capital. Desde el punto de vista económico —en un análisis comparativo con los años precedentes— según la tasa de crecimiento anual y global de los países más industrializados de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (O.C.D.E), ha sido un fracaso. El crecimiento global entre 1975 y 1998 fue apenas la mitad del alcanzado en el período de 1945 - 1975 con políticas desarrollistas donde los estados jugaban un papel determinante en la economía de cada país. Hoy día se acumulan las cínicamente denominadas “externalidades” como el desempleo, el aumento de la pobreza, la mayor concentración de la riqueza, junto a una peligrosa destrucción del ecosistema que lo sufren con mayor rigor los países del tercer mundo. De los dramas de la humanidad están saturadas todas las bases de datos de los organismos internacionales y no hay foro internacional donde éstas no se denuncien y reconozcan. Esta inusual transparencia se debe en alguna medida a la imposibilidad de ocultar realidades tan evidentes, y por otra parte, al triunfo político ideológico del capitalismo que ha establecido la idea de un fatalismo neoliberal sin alternativas. Las crisis consustanciales al sistema y al modelo, primero en México y recientemente en el centro mismo de los dragones asiáticos son ejemplos de la incapacidad del actual modelo para asegurar un desarrollo seguro y sostenido para la humanidad. Mas aún, el neoliberalismo mantiene y profundiza la esencia caótica del capitalismo basada en su insoluble contradicción entre producción y consumo. Las crisis cíclicas resultantes del dinamismo de la acumulación capitalista seguirán repitiéndose con mayor profundidad y extensión en directa proporción a la existencia y aplicación de un mercado y producción ultra liberal.

NEOLIBERALISMO, OPORTUNISMO Y HEGEMONÍA.

Es incuestionable que en la historia de la humanidad, nunca un modelo económico social se había impuesto de manera tan vasta y - de acuerdo a sus intereses y postulados— lo hace en condiciones muy favorables. No existen hasta hoy fuerzas opositoras y/o modelos alternativos de magnitudes considerables que le hagan frente. Más aun, la rápida e inesperada desaparición del socialismo en el Este de Europa le brindó sorpresivamente extensas áreas vírgenes para la inversión y explotación a gran escala, al tiempo que lo liberó del único competidor de envergadura que enfrentó al capitalismo como forma de organización de la economía. Por otra parte, la R.C.T. con su espectacular desarrollo de la informática, las comunicaciones y la robótica le otorgó fantásticos instrumentos para su expansión.

Asistimos a una acelerada internacionalización y crecimiento en volumen del capital financiero, y del comercio mundial de bienes y servicios. Este fenómeno se ha transformado en un proceso irregular y complejo de internacionalización de todas las formas de expresión y existencia que tiene la sociedad, y es parte inseparable y resultado del desarrollo de las fuerzas productivas a escala planetaria. Es un proceso objetivo que es consustancial al camino que tomó la humanidad desde hace por lo menos 500 años, sino antes. Este fenómeno integrador de la humanidad, que hoy se ha visto acelerado en magnitudes nunca antes vistas, se ha dado en llamar “mundialización” o “globalización” transformándose en el mejor y más eficiente “transporte” del modelo neoliberal. Pero debemos comprender que, en el futuro, perfectamente podríamos asistir a una “globalización” con un carácter diametralmente distinto al de hoy.

Es propio del modelo un crecimiento exponencial de la deuda externa del tercer mundo, la que hoy supera la exorbitante cifra de 2,5 millones de millones de dólares. La gran concesión de créditos por parte de las economías desarrolladas a partir de los años 60 se debió a un conjunto de factores: necesidad de mercados para sus productos, gran cantidad de capitales en depósito (eurodólares, petrodólares, etc.), y apuntalamiento de algunos países del tercer mundo para impedir la extensión de proyectos revolucionarios o antiimperialistas. También conllevaba un interés estratégico: lograr cada vez mayores grados de dependencia del tercer mundo obligando a reestructurar las economías nacionales a favor de los acreedores. Resulta ilustrativo detenernos en un simple dato para comprender el absurdo al que se ha llegado: entre 1982, año en que estalla la crisis de la deuda, hasta 1998 los países de la periferia han devuelto más de 4 veces lo que debían, y la deuda externa lejos de disminuir ha aumentado 4 veces desde entonces. Hoy se auxilia para pagar intereses, para paliar crisis que amenacen la estabilidad, supeditando todo a las exigencias de los organismos financieros internacionales que imponen el mismo esquema neoliberal para todos los países endeudados. La deuda es y será un factor de extorsión, la deuda es y será impagable e incobrable. La única solución a la deuda es política.

Las sociedades industrializadas ricas y poderosas continúan su desarrollo en gran medida a expensas del Tercer Mundo destinado a seguir como área de servicio, que proporciona recursos naturales y materias primas no renovables, mano de obra barata, mercados, oportunidades de inversión y lugar donde exportar la contaminación. Hasta ahora, para el Primer Mundo es imposible subsistir sin su periferia (aunque dejen grandes zonas olvidadas). Y esta periferia, materialmente no puede vivir sin los vínculos con el primero. Esto determina que cualquier proyecto político nacional, independiente a su signo ideológico, que pretenda atender las necesidades de sus habitantes alterando el papel asignado en este orden, se transformará irremediabilmente en una amenaza para los llamados “intereses vitales” de las naciones industrializadas y principalmente para los EEUU.

Cuando se habla de casi el 85 % de la población mundial que vive en países pobres, del sur subdesarrollado, no se desconoce ni olvida que el modelo ha profundizado el injusto y desigual proceso de incorporación a la riqueza de

segmentos elitistas de nuestros países que están convencidos de que su propio nivel de vida y de consumo son sinónimo de desarrollo y un seguro camino a la llamada “modernidad”. Estas minorías ricas conviven con vastas regiones de miseria en el Tercer Mundo y junto a considerables bolsones de marginales en el propio Primer Mundo. Según las Naciones Unidas, las tres personas más ricas del planeta poseen un patrimonio superior al PIB de 48 naciones, y al mismo tiempo verdaderas zonas “inviabiles” se establecen en distintos puntos del orbe. La lógica del capital al actuar en función de la rentabilidad es insensible a la hora de cerrar fuentes de trabajo, industrias, o sectores productivos.

El actual orden mundial se distingue también por el fortalecimiento de organismos internacionales y regionales tanto económicos como políticos y militares. Este orden es dominado por el primer mundo y a su cabeza se erige el imperio norteamericano, el que ejerce su hegemonía política y militar intentando desde esas posiciones compensar la pérdida del liderazgo absoluto que mantuvo hasta la década del 70. Un rasgo distintivo de la actualidad es el carácter, y empleo de los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su antidemocrático y dictatorial Consejo de Seguridad (C.S.) que decide independiente de la voluntad de la inmensa mayoría de los países del mundo, por parte de las potencias. Similar postura adoptan el FMI, el BM, la OCDE y la OMC (Organización Mundial de Comercio) para regir la economía del mundo. En el plano militar, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) recientemente estrenó una total independencia con relación a la ONU y su C.S., desatando una guerra contra Yugoslavia, y demostrando con ello absoluta impunidad y ausencia total de contrapesos. No importaron los enormes costos humanos y ecológicos. El objetivo principal que perseguían, el control general del Sudeste de Europa, fue disfrazado con justificaciones de “intervención humanitaria” frente a caos y genocidios inter étnicos, pero atacando sólo a los serbios y destruyendo sin la menor compasión un país completo. Extraña justificación que no origina la misma intervención en regiones de África donde en conflictos similares la gente muere o son mutilados a machetazos por miles.

Ha quedado plenamente en evidencia que EEUU pretende emplear a los organismos internacionales para ejercer una suerte de gobierno mundial que tendría su gabinete (Grupo de los 7), su estructura ejecutiva en lo económico, político (CS de la ONU), social e ideológico (ONU, Asamblea General, UNESCO, PNUMA, PNUD, OIT) y militar con la OTAN. No obstante a ello, las insolubles contradicciones económicas del capitalismo que se acumulan tanto en los ámbitos nacionales como en el plano internacional, hacen estructuralmente imposible prever una gran burguesía homogénea gobernando a escala planetaria.

Otro rasgo de estos tiempos es que la inmensa mayoría de los países de occidente son administrados por gobiernos filoneoliberales, con una paradójica ausencia de modelos alternativos. El dominio ideológico moral del capitalismo triunfante —empleando el control absoluto sobre los medios de comunicación masiva— continúa moldeando las conciencias de inmensas mayorías marcadas por el individualismo, que aceptan casi sin participación la renovación periódica de los administradores del sistema otorgándole una falsa legitimidad a las democracias burguesas. Además las instituciones jurídicas y políticas deben ser funcionales y deben garantizar el flujo y reproducción del gran capital. No es de extrañar entonces que el principio de la inviolabilidad de la soberanía intente ser cambiado y que se impongan nuevas normas jurídicas internacionales, acuñándose ya el concepto de “soberanía limitada”.

Por otra parte, aún perduran las dramáticas consecuencias en el pensamiento progresista, comunista y revolucionario internacional, de la brutal represión sufrida en las últimas décadas y del desastre en el Este de Europa, lo que ha provocado a su vez, la dispersión de millones de luchadores consumidos por la

derrota o absorbidos por el sistema, el debilitamiento y/o desaparición de organizaciones revolucionarias, partidos de izquierda y comunistas que en general se han resistido a una revisión profunda de sus catastróficos errores, la resignación y entrega a un neoliberalismo “humano y con equidad” de la social democracia y partidos cristianos y nacionalistas populares, y el debilitamiento del sindicalismo ante las nuevas formas de organización de los procesos productivos y la llamada flexibilización laboral.

Todo ese panorama crea una enorme inestabilidad en la población mundial la que ya arribó a los 6 mil millones de habitantes. El explosivo drama de la migración del sur pobre al norte rico será uno de los grandes conflictos del próximo siglo. El narcotráfico que mueve inmensas fortunas no es un conflicto que al Primer Mundo le interese solucionar, más bien es otra de las grandes justificaciones para el control y la intervención en los países productores. Si las razones de esa cruzada estuvieran en la preocupación por la salud de las personas, una gran guerra se hubiera desatado contra el tabaquismo y el alcoholismo que están dentro de los principales factores de mortalidad del mundo moderno. Si realmente se buscara terminar con las enfermedades y el hambre infantil, bastaría con destinar el dinero que el mundo gasta en armamentos durante sólo once días!. Por otra parte, ha quedado demostrado que los comunistas no eran, no son, ni serán “la amenaza” que genera el armamentismo. La razón de fondo está en la necesaria reproducción del capital del Complejo Militar Industrial, en las soterradas contradicciones de intereses económicos de los polos desarrollados y en la verdadera amenaza que significa la existencia de 4 mil 500 millones de pobres y vastas regiones geográficas marginadas donde a pesar de toda la adversidad, se gestan movimientos, proyectos y nuevas fuerzas que no se resignan al estado actual de la humanidad.

Estos rasgos económicos, políticos y culturales del panorama del mundo real no son ni absolutos, ni de claros contornos. A los fenómenos antes señalados se oponen la regionalización, la fragmentación, el proteccionismo y la discriminación en el comercio mundial, en las inversiones y en el traspaso de tecnologías productivas modernas. Y éstas contradicciones al y del discurso predominante nacen esencialmente de los propios países industrializados.

Hoy día, las inversiones de diversa índole y el comercio internacional son mayoritarios en aplastante proporción entre el mismo mundo desarrollado respecto al realizado con los países subdesarrollados. Las naciones industrializadas aumentan las barreras al intercambio comercial empleando una amplia batería de restricciones comúnmente denominada “neo proteccionismo no tarifario” o barreras no arancelarias, y mantienen y/o aumentan las subvenciones directas a su agricultura y a su industria. También financian a sus empresas transnacionales y otorgan la categoría de socios comerciales preferenciales a determinados países pobres. Los organismos Financieros (FMI, BM) y la O.M.C. intervienen en un comercio mundial dirigido al tiempo que exigen al Tercer Mundo que sus estados dejen libres a los mecanismos del mercado. Las reglas del actual comercio mundial aumentan el intercambio desigual en beneficio de los países ricos. Productos básicos como el azúcar, el cacao, el café y otros similares tienen hoy un poder adquisitivo equivalente al 20 % del que tenían en 1960. El valor real de las materias primas que venden los países pobres es hoy seis veces menor que hace ochenta años. Por otra parte, según su conveniencia EE.UU. otorga certificados para asignar recursos para la supuesta lucha contra el narcotráfico, y define gobiernos favorecidos en el intercambio comercial o los declara “aliados militares estratégicos”.

Vemos así que detrás del eufemismo del mercado se encuentran formas cada vez más concentradas de capital industrial y financiero que poseen un poder económico cada día mayor, que incluye la capacidad de no hacer funcionar el mercado, de cortocircuitar y sobrepasar los mecanismos del intercambio normal. Un tercio del comercio mundial actual es el resultado de las exportaciones e

importaciones hechas por empresas transnacionales, mientras que otro tercio toma la forma de intercambios intra grupos, entre filiales de una misma sociedad situadas en países diferentes o afiliadas de la casa madre. Las empresas transnacionales — que han pasado a constituir entidades de gigantescas dimensiones respaldadas por sus países de origen— son, en suma, quienes se disputan nuestros países. Definen los volúmenes y el sentido de la corriente de inversiones y operan con la más alta tecnología producto de una exacerbada competencia en medio de un dinámico crecimiento comercial. Y por último, son las instituciones del capital financiero con fuertes características rentísticas las que por medio de las opciones que efectúan en los mercados financieros, condicionan no sólo la distribución del ingreso sino también el ritmo de las inversiones y las formas de empleo asalariado. Estas instituciones (Bancos e inversionistas institucionales como las compañías de seguros, los fondos previsionales por capitalización y las sociedades financieras de colocaciones colectivas) son los verdaderos dueños del capitalismo contemporáneo.

Coexisten, por tanto, la internacionalización del comercio mundial con la regionalización, el libre mercado con la regulación y la intervención, el orden mundial con el desorden. Estas contradicciones y tendencias obedecen en última instancia a la lógica de acumulación y expansión de una inmensa riqueza o megacapital que atesora un reducido grupo de países del Primer Mundo. En última instancia todo se reduce a la “protección de sus intereses vitales”. A esta esencia y realidades se subordinan las oportunistas reglas, tendencias y conductas que orientan el funcionamiento de las relaciones políticas, económicas, militares e ideológicas internacionales. Existe y existirá una abierta o encubierta competencia entre ellos y debemos recordar que nuestra región siempre ha sido un excepcional escenario de estas disputas. Será responsabilidad de los gobiernos del Tercer Mundo y de nuestra América en particular el impedir que alguno de los bloques termine por dominar totalmente la economía y soberanía de nuestra región. Es historia conocida que a principios del siglo XX se presentó una coyuntura similar cuando la mayor parte de nuestros países salió de la órbita inglesa para caer finalmente en manos norteamericanas.

De seguir así, los pocos espacios de democracia existentes irán disminuyendo progresivamente llegando a considerar como normal la total apatía política y el dejar la administración de los gobiernos —como ya se observa— en manos de reducidos sectores empresariales, tecnócratas y elites políticas profesionales. En medio del aumento de contradicciones entre las grandes áreas de poder se mantendrá la tendencia a gobernar globalmente empleando a los organismos supranacionales, con la hegemonía del Primer Mundo y principalmente de los EEUU. Tanto las normas de derecho internacional como las de soberanía de los estados irán cambiando radicalmente en detrimento de los más débiles.

Un mundo con tales contradicciones, erigido sobre tamañas desigualdades es simplemente incontrolable e inviable. No puede ser ordenado y dirigido tampoco a punta de bombazos. Si bien la globalización neoliberal es una realidad como tendencia en términos políticos y económicos, en el Tercer Mundo como contrapartida, existirá una resistencia a la pérdida de las soberanías conjuntamente con la reorganización de las luchas populares.

AMÉRICA LATINA; ENTRE OROPELES Y AGONÍAS

América Latina, casi un continente inmensamente rico, nuevamente es conquistada, ahora por ese proyecto ultra liberal, perdiendo otra vez toda posibilidad de dejar de ser —como ha sucedido desde su independencia— región periférica, tercermundista y subdesarrollada subordinada económica, política y culturalmente al norte desarrollado y rico. Y es en Chile donde particularmente concurren y se concatenan diversos acontecimientos y voluntades antes y después del golpe de estado de 1973 que darán origen al primer proyecto estrictamente neoliberal del mundo. A pocos

meses de instaurada la dictadura militar se comienza a implementar un plan que ha quedado con el nombre de “EL Ladrillo”, en el cuál está la esencia del proyecto político y económico que se aplicaría posteriormente en el país.

Desde los años 60 venían consolidándose las ideas ultraliberales —no como un puro ejercicio intelectual— sino en una franca elaboración teórica como respuesta a la pérdida y retroceso del capital ante décadas de avance del “trabajo”. Pero recién en 1980 se impone paulatinamente un neoliberalismo diferenciado entre países centrales y periféricos. México aceleradamente sigue los pasos de Chile y hoy son exhibidos como exitosas puntas de lanza del modelo. Con matices de contenido y asincronía en los plazos, cada país de la región durante todo un período que ya abarca alrededor de 20 años ha sufrido los planes de ajuste neoliberal, y aunque el modelo es una indiscutida realidad en la región, aún al comenzar el 2000 la ortodoxia neoliberal lucha por imponerse definitivamente. En Latinoamérica todavía quedan estados con industrias y recursos, aún existen organizaciones sindicales poderosas y legislaciones laborales proteccionistas, aún no terminan por privatizarse definitivamente todos los servicios esenciales. Hay grandes presiones para reducir más los gastos fiscales, en salud, educación, vivienda, pensiones. Para los designios del modelo, definitivamente tendrían que dejar de ser derechos y transformarse en mercancías e incorporarse al mercado. Pero todavía no existe una ola de lucha popular de magnitud considerable recorriendo toda la América que genere temor y menos aun que amenace a toda la cúpula beneficiada por los cambios y se detenga categóricamente la imposición total del modelo.

América Latina pronto arribará a los 500 millones de habitantes de los cuales 220 millones (según los últimos datos de la Cepal) viven bajo los índices de pobreza establecidos por los organismos internacionales, y de ellos, 150 millones están en condiciones de marginalidad. Una parte mayoritaria de esa pobreza y marginalidad es urbana. La OIT resalta que entre 1991 y 1999 el desempleo en la región aumentó, hasta alcanzar cerca de un 9%, habiendo ocho países que rondan o superan el 20%. Es importante destacar que estas cifras oficiales no consideran el subempleo, y los trabajadores temporales y ocasionales. En algunos casos un trabajador con solo emplearse unos días al mes, o simplemente por no buscar empleo, no entra en las estadísticas. La cesantía real en muchos países de la región ronda el 30% o más, y en algunos, las cifras de ese desempleo en el sector juvenil, sobre todo de jóvenes provenientes de sectores populares, llega a más del 40%. Para muchos latinoamericanos el no estar considerado en esos índices —de acuerdo con parámetros internacionales establecidos— el no ser calificados de “pobres”, solamente significa que los ingresos por núcleo familiar le permiten a cada hogar satisfacer las necesidades esenciales de sus miembros. Otros organismos lo miden por el ingreso como mínimo de un dólar diario. No se sabe cuantos millones de hogares viven en el límite inmediatamente superior de las precarias fronteras que los separan de los pobres y miserables. Nadie mide la desgracia del que sólo vive para consumir ni mucho menos del que apenas lo puede hacer. Nadie conoce cuántos sólo viven para apenas vestirse, comer y reproducirse soñando con un mundo de imágenes en TV. Las estadísticas, aunque de gran utilidad, no pueden reflejar en toda su magnitud el drama de miseria espiritual y material que por generaciones han padecido vastos sectores populares —que están dentro o fuera de los índices de pobreza y/o cesantía— en las grandes ciudades y los campos de América Latina.

Así, pobreza y trabajo, son dos de los índices más representativos que reflejan objetivamente la miseria material en que viven casi la mitad de los habitantes de nuestra región —y aunque parezca paradójal, pues no lo es— estos índices todavía son muestras del “crecimiento” que tuvo la región desde que salió de su “década perdida” en 1990. Entre 1991 y 1997 el crecimiento fue sostenido logrando un 3.5% del P.I.B. como promedio del período. Recién en 1997 los organismos internacionales mostraban eufóricos un 5,2%, pero en 1998 se registró

una desaceleración (2.3%) y para 1999 el Banco Mundial estimó para la región un casi “estancamiento” con un P.I.B. de 0.8%. La CEPAL, por su parte, señala para América Latina en 1999 una clara recesión o nulo crecimiento, habiendo indicios de recuperación para el 2000. Pero aún no se reflejan en las estadísticas los efectos de la recesión comenzada en Asia en 1997. Aún así es probable que con los ajustes y medidas fondo monetaristas los índices macroeconómicos vuelvan a ser positivos.

En los últimos años se han agravado los niveles de desigualdad y concentración de la riqueza en la región, llegando a ser uno de los más pronunciados del mundo. Podemos constatar que en la mayoría de los países de América Latina aumentó la brecha entre ricos y pobres siendo nuestro país uno de los que ostenta los mayores récords en desigualdad en el ingreso. Otros países plétóricos de riquezas como Brasil, Argentina y Venezuela muestran absurdas y hasta increíbles cifras de desigualdad. El proyecto neoliberal no ha generado un desarrollo armónico para nuestra región, pero es innegable que determinados sectores privilegiados viven en plena modernidad. Más de 850 Mc Donald's están en América Latina y más de 600 mil latinoamericanos tienen acceso a Internet. Más de 3,5 millones de personas están abonados a servicios de teléfonos móviles. De los 225 ultra ricos del mundo 22 pertenecen a la región, con una riqueza combinada de 55 mil millones de dólares. Esa cifra es superior en ocho mil millones de dólares al PIB combinado de Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, el Paraguay y Trinidad y Tobago. A nuestras clases pudientes e importantes segmentos de capas medias altas, ya se les denomina “elites globales” y “clases medias globales” ya que siguen los mismos estilos de consumo que las de otras partes del planeta con una preferencia por las mismas “marcas globales”. Estos sectores cada vez más identifican y consideran a conceptos como “patria”, “modernidad” y “desarrollo” como su modo de vida, trastocando tradicionales valores de solidaridad, independencia y soberanía. Por otra parte, enormes masas consumistas de fetiches, egoístas y apáticas —ajenas a la miseria cercana y aplastadas por el actual triunfo ideológico del capitalismo— atiborran los “mall” de las grandes urbes, e inermes ante los monopolios de la difusión, se dejan gobernar votando de cuando en cuando, legitimando una falsa democracia. Importantes sectores cambian patrones de consumo y viven expectantes a un modo de vida “estándar” del primer mundo que la R.C.T ha puesto dentro de sus hogares. La globalización de una monocultura, la profundización de la dependencia y de las relaciones con el mercado internacional de recursos y capitales han propiciado esta incorporación de selectos grupos de latinoamericanos al modo de vida del Primer Mundo. Amplias capas medias y bajas son alienadas rompiendo viejas tradiciones y costumbres nacionales.

La modernidad irresponsable y la condición de continente “periférico y dependiente” facilitan y aceleran las graves consecuencias que tiene para la calidad de vida de los latinoamericanos la degradación y destrucción del medio ambiente. Por ejemplo, el combustible con plomo afecta en forma permanente el desarrollo del cerebro de los niños y en América Latina unos quince millones de niños corren el riesgo de perder cuatro o más puntos de CI (coeficiente intelectual) como consecuencia de dichas emisiones de plomo. En los últimos 20 años América Latina y el Caribe ha encabezado al mundo subdesarrollado en deforestación, talando más de siete millones de hectáreas de bosques, siendo una parte importante la tala de la reserva forestal mundial del Amazonas. Esto significa casi el doble del ritmo aplicado en Asia sur oriental y el Pacífico. Además, hay más de 240 millones de hectáreas de suelo degradadas. Los desastres naturales, su reiteración, el extraño comportamiento del clima, son claras muestras de los efectos de la agresión al medio ambiente. Las pérdidas humanas, los daños económicos y las destrucciones de capital productivo ocasionados por desastres naturales han sido particularmente importantes durante los últimos años. El último episodio de la corriente de El Niño, que comenzó en 1997, produjo tanto inundaciones como sequías que causaron

daños y pérdidas de producción estimadas en 15000 millones de dólares y varios países devastados. Por demás, los patrones de consumo actual van en desmedro de la base ambiental de recursos, exacerbando las desigualdades, y acelerando la dinámica del nexo consumo-pobreza-desigualdad-medio ambiente. Así vemos que los mayores consumidores de energía, de recursos y materias primas no renovables son los EE.UU y los países desarrollados, los mayores contaminadores y emisores de gases que recalientan la atmósfera son los EE.UU y el Primer Mundo. Y particularmente los EEUU son los únicos que no se comprometen a reducir en nada, en ningún por ciento sus emisiones contaminantes.

En el plano político las fórmulas neoliberales se aplican suponiendo que las doctrinas librecambistas conducirán inevitable y directamente a la libertad política y la instauración de gobiernos democráticos. Se apropian del concepto entendiendo como “democráticas” las actuales fórmulas representativas donde son cada vez menos quienes participan y se interesan en ser “representados” bajo el esquema de partidos políticos. El neoliberalismo ha llevado a la desestructuración de gobiernos y estados nacionales, así como a la estandarización de proyectos políticos de todos los signos. Se intenta de tal manera consolidar, estandarizar, uniformar un modelo, de modo que no importe quién lo administre. Los poderes económicos se han afianzado de tal manera, que han conducido a un mayor alejamiento de la economía respecto de la política. Los centros de poder nacionales o supra nacionales deciden las políticas económicas mientras los gobiernos, con pocos márgenes de maniobra, se han transformado en simples administradores de un sistema que se muestra como único e infalible. El partidismo tradicional ha demostrado que no aumenta ni es el camino para la participación de las mayorías. La “profesionalización” y la tecnocracia es la falsa “modernización” que se impone como fórmula de conducción y administración política.

En su último informe la CEPAL reconoce que el proceso de modernización de las políticas comerciales que ha tenido lugar en los países de América Latina y el Caribe desde mediados de los años ochenta, no ha logrado aún cambiar sustancialmente la especialización exportadora de la región, y su carácter importador de manufacturas y productos industrializados. La mayor parte de las economías latinoamericanas depende de unos pocos productos (especialmente materias primas y recursos naturales) o de unos pocos mercados (o de ambos) para sus ingresos de exportación. Además, por más que se pretendió reducir las importaciones, en el último año la balanza comercial de la región fue negativa. Se responsabiliza de ello a la baja de los precios internacionales de algunos productos de exportación, obviando la raíz sistémica de un capitalismo universal.

En el nuevo esquema si algo ha cambiado, es la forma e intensidad del robo a las economías nacionales y por consiguiente se ha profundizado la explotación de toda América Latina. La región privatiza sus grandes riquezas siendo éstas aún rentables. Poco a poco elimina todo tipo de barreras a los productos extranjeros y se inundan los mercados nacionales con ellos. Los gobiernos se disputan los capitales foráneos tanto de inversiones directas a los sectores más rentables como préstamos “especulativos” a corto plazo. Se privatizan y encarecen servicios tradicionalmente estatales como la salud, la educación y principalmente los fondos de pensiones por generar estos de manera constante y a un largo plazo enormes ganancias que se reinvierten aumentando las utilidades a sus propietarios. La llamada flexibilización laboral y las nuevas políticas sindicales no llevan otro objetivo que reducir o limitar la capacidad de presión y negociación de los trabajadores usándose la reducción salarial como vía, en última instancia, para elevar las tasas de ganancias del capital. Así un obrero gana 20 dólares por hora en una empresa de EEUU y 2 dólares en la misma empresa del otro lado del río Bravo (frontera entre EEUU y México).

Por otra parte, América Latina transfiere riqueza neta al mundo desarrollado. Hasta el año 1999 la deuda extranjera del conjunto de la región había

alcanzado la asombrosa cifra de los 750 mil millones de dólares. Solo el año 1988 el pago de intereses y amortizaciones fue del orden de un 15,5 % de las exportaciones totales de la región. Por concepto de intereses y amortizaciones desde 1982 hasta 1997 se han pagado alrededor de 400 mil millones de dólares. Según cifras del Banco Mundial se ha pagado como promedio el 50 % del total de la deuda. Todos sabemos que la deuda es impagable e incobrable, y bajo las actuales condiciones, una supuesta moratoria general de la región traería insospechadas e impredecibles consecuencias para el orden económico mundial.

Este esquema de relaciones tan desventajosas solo puede darse en condiciones de relaciones políticas y económicas de subordinación. Desde la doctrina Monroe hasta hoy los EE.UU. han luchado por rechazar en la región la presencia de economías poderosas extra continentales. EE.UU. como gendarme mundial, y en clara competencia con Europa y Asia, pretende extender el actual T.L.C. (con México y Canadá) a toda la región creando un “Área de Libre Comercio de las Américas” (ALCA) poniendo como fecha límite para tal “acuerdo” el año 2005. Pero en nuestra región EEUU año tras año pierde su liderazgo en materia de negocios ante la Unión Europea. Las inversiones norteamericanas que en el área han predominado históricamente sobre las europeas, hoy prácticamente son casi iguales. Son rasgos de una desesperada carrera del imperio previendo que este nuevo siglo será inevitablemente de grandes tensiones por el reparto mundial entre los mega bloques con sus empresas transnacionales.

En el plano militar, Washington está intentando actualizar el papel de los ejércitos latinoamericanos en un esquema de subordinación. La nueva estrategia fue afinada en noviembre del 99 durante la XXIII Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), celebrada en La Paz, Bolivia, a la que asistieron representantes de las fuerzas armadas de 17 países miembros. Allí se acordaron las tácticas y estrategias que sustituyen la “amenaza externa” y la “subversión comunista”, propias de la guerra fría, por las renovadas consignas de combatir el terrorismo, el narcotráfico, la migración ilegal y la defensa del medio ambiente. Acorde con esto, EEUU diseñó el Plan Colombia el que forma parte de un proyecto militar global del Departamento de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio pero que no es otra cosa que una estrategia de guerra, encubierta con proyectos de desarrollo económico y social. Queda claro que el Pentágono está adoptando un enfoque estratégico al estilo “salvadoreño” en los 80, con la intención de realizar una guerra aérea tipo Kosovo, armada y biológica contra las fuerzas rebeldes colombianas, una concepción que evita la intervención militar directa de los norteamericanos, favoreciéndose una asistencia escalonada en forma de equipos, asesores, entrenamiento y tecnología de inteligencia. Colombia es el escenario piloto de aplicación de dicha estrategia, la que contempla una segunda fase con la participación de las fuerzas armadas de toda la región. Las acciones de control militar contempladas en el Plan Colombia forman parte de una estructura regional de seguridad dirigida por el Comando Sur del ejército de Estados Unidos, con participación de otras agencias estadounidenses. Un conjunto de bases desplegadas por todo el continente aseguran la total vigilancia del espacio aéreo en toda la región: las de las islas holandesas de Aruba y Curazao, conjuntamente con las de Roosevelt Roads (Puerto Rico), Bahía de Guantánamo (Cuba), Liberia (Costa Rica) y Soto Cano (Honduras). Pero los puntos clave, en consonancia con el avance hacia América del Sur, son las nuevas bases militares que Estados Unidos montó en Iquitos, en la Amazonia peruana, la de Manta (Ecuador) y la de Tres Esquinas en Caquetá al sur de Colombia. Esta estrategia militar norteamericana, que obedece al deterioro progresivo de su influencia política y económica en el continente, revela la absurda y criminal preferencia de Washington por una región desestabilizada (lo que supondría la dependencia de los gobiernos regionales a su ayuda militar y económica, situación que alimentaría a sus transnacionales y a su complejo militar industrial) a un mercado común

sudamericano integrado e independiente en el que debería competir en igualdad con la Unión Europea y otros polos político-económicos del mundo. La opción de EEUU puede llevar no sólo a una regionalización del conflicto colombiano, sino también a un empantanamiento bélico en la zona andina de consecuencias insospechadas.

Es así que la imprescindible integración regional tiene opciones opuestas según se atengan a los intereses de la región o de las potencias. En un caso, el del ALCA, el sometimiento de las economías de nuestros países a la de EEUU, deformaría y bloquearía el desarrollo industrial de nuestras naciones, consolidando nuestro papel exportador de materias primas y profundizando la dependencia política, económica y cultural. No es lo mismo asociarse entre iguales que con una potencia siendo naciones débiles. En el otro caso, el Mercosur-Comunidad Andina, la integración regional como un solo cuerpo capaz de negociar e intercambiar con los poderosos, es el paso necesario para comenzar un largo proceso que nos proyecte hacia un desarrollo sustentable. El problema de la integración trasciende lo económico y se instala en lo político. La necesidad de actuar en conjunto mejora la correlación de fuerzas a la hora de negociar, o tomar decisiones en el ámbito mundial. Sudamérica tiene la magnitud (en población y PIB) requerida para constituirse en un bloque que participe en la política mundial en un contexto de multipolaridad.

En este sentido, si bien en la región la mayoría de los países se aviene a los dictados del Imperio o por lo menos asume posiciones vacilantes, comienzan a percibirse algunas señales de resistencia a los inocultables intereses anexionistas de Washington. El caso más emblemático es el de Venezuela, con el liderazgo de Chávez, y sus ideales bolivarianos antiimperialistas de integración, pero también lo es el de Brasil, que últimamente está trabajado en función de sus propios intereses, disputando sutilmente el liderazgo de la región. Este país convocó a la primera reunión de presidentes del cono sur en el afán de establecer acuerdos fundamentales para construir un espacio común regional para el 2002 a través de mecanismos de coordinación política y económica entre el Mercosur y la Comunidad Andina. Este bloque de libre comercio supone un mercado potencial de más de 300 millones de habitantes y un PIB global superior al billón 500.000 millones de dólares. También están promoviendo la interconexión de los grandes ríos sudamericanos y la construcción de una red carretera, una poderosa infraestructura, con el afán de acceder a los mercados asiáticos por medio de los puertos del pacífico. En este proyecto la diplomacia brasileña trabaja para acercar a la mesa de negociaciones a naciones con históricos conflictos, como Chile y Bolivia. Por último, frente a la estrategia militar norteamericana para la región, especialmente el llamado Plan Colombia, han dejado claro que no están interesados en integrar una fuerza militar internacional e inclusive le han negando el apoyo logístico al gobierno colombiano para el uso de bases aéreas y de radares brasileños. Para este país, e incluso para el Mercosur, un remedo de "Vietnam" en la selva colombiana provocaría la desestabilización regional, ahuyentaría a los inversores internacionales, crearía la imagen de área de riesgo y conspiraría contra cualquier intento de despegue económico. Estas posiciones lo han llevado a afirmar que no existe la más remota posibilidad de que Brasil acepte una relación que implique coordinación y mucho menos subordinación de las fuerzas armadas o de la policía con cualquier potencia, posiciones que EEUU mira con recelo. Por otra parte, Brasil y Venezuela firmaron un acuerdo de cooperación militar para la vigilancia amazónica. Y países como Venezuela, Panamá, Perú, Ecuador (y el propio Brasil), se decidieron a movilizar tropas tomando posiciones en áreas fronterizas con Colombia, dato que no registra antecedentes en la historia latinoamericana desde las guerras de Independencia, mientras la diplomacia norteamericana realizaba ingentes esfuerzos por evitar que Chile, Ecuador y Argentina se plegaran a la propuesta brasileña. En suma, se perfila

un nuevo eje político con asiento en Brasilia y Caracas que podría gravitar con fuerza sobre la región.

AMÉRICA LATINA; NUEVOS ESCENARIOS, NUEVOS COMBATES.

Ante tal panorama, es de elemental razonamiento que la sociedad debe reaccionar. Sabemos que una sociedad organizada así no puede permanecer en paz por demasiado tiempo. Es imposible que con tanto drama acumulado en tantos millones de hombres y mujeres no se intente —por diferentes vías— cambiar tal estado de cosas. Son millones los trabajadores que en pocos años han perdido beneficios y conquistas que por décadas la clase obrera le arrancó al capital. Son demasiados los jóvenes acosados por el desempleo, las marcas, las drogas y lanzados como marionetas ineptas a una sociedad normada por tecnócratas y el mercado. Es imposible que intelectuales con sensibilidad y un básico humanismo no busquen soluciones alternativas a tanto sin sentido. Es absurdo pretender que el pensamiento progresista y las organizaciones políticas de la izquierda revolucionaria latinoamericana no intenten resurgir ante tan objetivas presiones de los sectores marginados y empobrecidos por el modelo. Y en muchos casos son esos mismos sectores quienes se han levantado y se organizan para luchar por una vida digna.

No pocas organizaciones que hoy están mostrando éxitos relativos surgieron mucho antes del desastre socialista. Lo nuevo también está en adecuar conceptos, resistir este período negativo y al mismo tiempo ir cumpliendo planes de menor alcance que en alguna medida son pasos de posibles transformaciones más profundas. Inclusive algunos simplemente van logrando éxito en objetivos concretos en algún preciso sector aún careciendo de ordenados esquemas y proyectos de largo plazo. Es interesante hacer notar que últimamente un objetivo de lucha muy común en todo el continente es el de apelar a la necesidad de una Asamblea Constituyente, es decir, a un nuevo pacto social. En definitiva, por vías de resistencia no armadas, como en el caso del Ecuador, Bolivia o Venezuela, o armadas como en el caso de Colombia y México, pasando por muchos de los movimientos del resto del continente, ese es el clamor común: el de una nueva relación, de justicia y bienestar entre los Estados y sus pueblos.

Veamos algunos ejemplos de lo que pasa en nuestro continente en esta etapa:

MOVIMIENTO DE LOS SIN TIERRA (BRASIL)

Uno de los movimientos más interesantes y dinámicos de los últimos tiempos es el brasileño “Movimiento de los Sin Tierra” (MST) que nace a fines de los años 70 a raíz de varios factores: el aumento de los campesinos sin tierra como consecuencia de la modernización del capitalismo en el campo; el reinicio de las luchas democráticas contra la dictadura, que abrieron espacio para las tomas de tierras en el campo y el trabajo político organizativo de la pastoral de la tierra y de los sindicatos combativos. Logran organizarse a nivel nacional en los 80, y en lugar de sufrir el impacto de la crisis de las izquierdas, se han transformado en la organización social más combativa y reconocida en ese país y una de las más respetadas a nivel mundial. Lo incuestionable, claro y preciso de su razón de ser, “tierras para los campesinos”, la forma de lucha combativa y con resultados inmediatos, el carácter de sus dirigentes nacidos de sus filas y que están junto a las bases en igualdad de condiciones, su independencia de esquemas partidarios tradicionales, su estricto apego al pueblo, son entre otras, algunas de las características que le han permitido al movimiento llegar a ser un actor imprescindible en la política brasileña.

Estos revolucionarios se apoyan en un precepto constitucional que exige la expropiación de las tierras sin cultivar, o sea apelan a la legalidad existente, pero al mismo tiempo desarrollan formas de lucha no tradicionales rompiendo siempre que se requiera con dicha legalidad. Su acción y ejemplo pueden extenderse a las

grandes ciudades de Brasil, país que por su magnitud es determinante y estratégico para el futuro de Latinoamérica.

Su propuesta de Reforma Agraria viene evolucionando permanentemente de acuerdo con el mayor conocimiento que van adquiriendo en la lucha. Al principio del movimiento pensaban que bastaba luchar por la tierra. Pero después de conquistar muchas haciendas, percibieron que hacía falta el crédito, insumos, maquinarias y otras necesidades para poder hacer producir esa tierra. Hoy día su propuesta de reforma se sustenta en un programa agrario bastante complejo que no responde a los parámetros de mediados del siglo XX, ya que para ellos el problema no se resume en destrabar la concentración de la propiedad de la tierra. Ellos dicen “nuestra lucha es por superar tres cercas: la cerca del latifundio. Para eso tomamos las haciendas. La cerca del capital. Para eso necesitamos organizar la producción agrícola de otras maneras, desarrollando las cooperativas y sobre todo la agroindustria. Y la tercera cerca es la de la ignorancia. Por eso dedicamos todo el tiempo necesario para la democratización de la educación en el campo. Para que todos los campesinos se superen permanentemente. Quien sea analfabeto, se alfabetice. Quien no tenga el primer grado, que lo termine. Quien tenga el primero completo, que haga el segundo grado, hasta que lleguemos a colocar a nuestros hijos en las Universidades. Nuestra lucha es bien amplia. Seguimos ocupando tierras, pero ocupamos también bancos, calles, y escuelas. Decimos que el pueblo tiene que organizarse y enfrentar de forma masiva todos los problemas que tiene”. Además su propuesta de Reforma Agraria es de largo plazo, su ideal como dicen. Pero eso no impide que empiecen a luchar por implementarla en tareas cotidianas desde hoy mismo, sea en el enfrentamiento con el latifundio, sea organizando la producción de manera distinta, sea desarrollando sus agroindustrias y educando. Así, con esas luchas concretas van alterando la correlación de fuerzas para que el día de mañana, cuando se logre un gobierno popular, este amplíe la propuesta de Reforma Agraria a todo el país y toda la sociedad.

Como si esto fuera poco, el movimiento se ha preocupado especialmente en articularse con otras fuerzas del movimiento popular y sindical, nacional e internacional en base a actividades de luchas comunes. Por ejemplo, a nivel nacional están articulados con amplios sectores en un movimiento que llaman «Consulta Popular», para llevar a todas las bases posibles la discusión de un proyecto popular para el Brasil. También están articulados con los movimientos populares y la iglesia progresista, para lo que denominan el «Grito de los Excluidos», en el que todos los años el día 7 de septiembre, día de la Patria, organizan manifestaciones populares masivas, ocupando un espacio que antes era monopolio de las fuerzas armadas. Y hay también otros niveles de articulación con la Central Única de Trabajadores brasileña (CUT) y El Foro de San Pablo como espacio de encuentro y reflexión de la centro izquierda y la social democracia latinoamericanas. Y en el plano internacional, el MST siempre ha valorizado y priorizado la integración con el movimiento campesino de Latinoamérica y en general del Tercer Mundo. De ese acercamiento han logrado construir el CLOC (Congreso Latinoamericano de Organizaciones del Campo) el cual logró superar sus diferencias ideológicas y se ha transformado en un instrumento unitario que reúne las principales organizaciones campesinas de todos los países de Latinoamérica. La articulación de las distintas organizaciones que se expresan en esa instancia no es burocrática, ni basada en cuotas de poder, sino que se asienta sobre la base de acciones concretas, sea de masas, sea de formación. A su vez el CLOC de algunos años para acá ha logrado construir la Vía Campesina, que es un espacio a nivel internacional, que ya reúne 87 organizaciones de todos los continentes.

Los Sin Tierras como movimiento son muy plurales ideológicamente, quizás el rasgo más importante hoy día para lograr articular un referente de lucha amplio. Como resultado de su propio nacimiento y de su forma de trabajar, partieron de la

necesidad de aprovechar el conocimiento, la teoría de todos los grandes luchadores y pensadores del pueblo brasileño y de otros países, sin una admiración ciega, o la reproducción doctrinaria de sus enseñanzas, sino siempre intentando aprender lo que es universal en esos luchadores y pensadores. Así se han nutrido de Caio Prado Junior, Celso Furtado, Josué de Castro, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, o a nivel internacional de Marx, Engels, Lenin, Mao, Mandela, Che Guevara, Lumumba, Mariátegui, José Martí, Gramsci, y tantos otros luchadores.

Su concepción para la construcción de un proyecto popular está basada en tres características complementarias. Primero, que se necesita una elaboración teórica que analice científicamente su realidad, y que localice cuáles son los verdaderos problemas que Brasil tiene. Segundo, que es necesario construir alternativas, soluciones para esos problemas, y presentarlos con la forma de banderas de lucha, de símbolos, en un esfuerzo de pedagogía de masas, para que el pueblo agarre las ideas, y luche por ellas. Y tercero, es necesario desarrollar siempre luchas de masas, que son las que pueden vincular las conquistas inmediatas con el proyecto (que puedan concientizar a las masas y alterar la correlación de fuerzas). Por eso están trabajando con la militancia, con la base, y con todas las organizaciones afines, para acumular en esos tres aspectos complementarios. Por otra parte la metodología para ir construyendo el proyecto es muy sencilla. Cada cual en su organización popular, sindical, partidaria, lleva adelante acciones que pueden seguir desarrollando esos tres aspectos. Los debates giran en torno a tres cuestiones: ¿Cuáles son los verdaderos problemas del pueblo y sus causas?, ¿Cuáles son las salidas para esos problemas? y ¿Cómo se van a organizar para enfrentarlos? Y esa es su preocupación actual, además de todo lo ya expuesto: movilizar el debate con toda la sociedad en torno al proyecto popular que Brasil requiere, porque son conscientes de que la Reforma Agraria no tiene ninguna posibilidad de implementarse con el proyecto neoliberal de las elites; saben que la misma depende del avance de los cambios generales en Brasil. Por lo tanto su desafío hoy día es hacer acciones que involucren cada vez más a la sociedad, y de desarrollar y propagandizar cada vez más los valores éticos de una sociedad más justa, fundamentados en la solidaridad y en la justicia social. Y la mejor solidaridad que esperan de otros luchadores es que cada quién realice su propia pelea en su propio país.

CHÁVEZ Y EL MOVIMIENTO BOLIVARIANO EN VENEZUELA.

En Venezuela, el presidente Chávez plantea cambios democráticos y populares apoyándose en un gran movimiento de masas sin contar con partido político tradicional que conduzca y respalde su proyecto. Es una experiencia de interés en la búsqueda de caminos nuevos ajenos a determinados esquemas teóricos o ideológicos preestablecidos. Su gobierno tiene un claro carácter popular, con un liderazgo indiscutido, donde casi todo el movimiento descansa en él, apoyándose en La Nueva Constitución que aprobó la Asamblea Constituyente (de la cual él fue artífice imprescindible) y en unas Fuerzas Armadas que en su mayoría tienen un origen popular o campesino, que podría originar un nuevo, lento y probable proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de su población.

Chávez se ha cuidado de no amenazar abiertamente los intereses de EEUU, pero en asuntos claves ha definido sin ambigüedad políticas contrarias al Imperio, por ejemplo en la creciente incidencia de Venezuela en el concierto de países exportadores de petróleo con quienes logró aumentar el precio del barril de petróleo de 10 dólares a 30 en menos de un año, al tiempo que definía propuestas más justas para la adquisición del vital energético para los países pobres, especialmente centroamericanos y caribeños; en la autonomía mostrada a la hora de relacionarse con países petroleros del Medio Oriente bloqueados por EEUU; en el apoyo y solidaridad hacia Cuba, y en abiertos pronunciamientos de rechazo a toda

intervención foránea en el área en alusión a la probable participación de EEUU en la guerra de Colombia.

Hasta hoy sus acciones han mostrado un difícil combate contra la corrupción y el robo de las cuantiosas arcas nacionales, derivadas de las enormes utilidades que genera el petróleo. En este sentido es una singularidad en América Latina. Si tiene éxito —con sólo esos recursos— el país podría mejorar las condiciones de vida del casi 80 % de los venezolanos, los cuales viven en condiciones de pobreza. Un rasgo emblemático de esta experiencia es el haber barrido con una clase política viciada y corrupta y con un sistema político entronizado, gastado e inviable para el país.

Para el contexto latinoamericano la experiencia venezolana es una muestra más de la crisis de las formas tradicionales de hacer política y una posibilidad nueva en la búsqueda de proyectos diferentes al neoliberalismo imperante. Las posturas bolivarianas de Chávez son un necesario comienzo para lograr la imprescindible integración latinoamericana, única posibilidad de resistir a las aspiraciones hegemónicas del gran imperio. Además él apela a tres nociones casi ausentes en los discursos oficiales de las últimas décadas: el de comprender que se está llegando al agotamiento de las políticas dominantes, la reivindicación de la soberanía, y un llamado a construir democracias participativas (no sólo representativas).

EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (EZLN) de MÉXICO

Otra de las experiencias importantes e impactantes de estos últimos años ha sido la de los zapatistas. Posiblemente ese impacto se deba no sólo a que surgen a la luz pública como una gran insurrección armada, con la participación y el respaldo de una fuerza de masas impresionante y mayoritariamente indígena, y en medio del repliegue mundial de casi todas las fuerzas progresistas del orbe tras la debacle del Este de Europa, sino porque consiguen sintetizar en un discurso y una práctica profundamente humanistas y no dogmáticos, los cuestionamientos fundamentales que hoy día se hace buena parte de la humanidad. Frente a la prepotencia del poder, demuestran cómo es posible generar una cultura verdaderamente democrática; frente a la uniformidad globalizadora que nos quiere imponer el sistema, nos proponen su ideario revolucionario de aceptar la diversidad humana y todos los desafíos que esto conlleva. Las viejas oposiciones ideológicas entre identidad e integración, cultura y economía, utopía y pragmatismo, razón y corazón, particularidad y universalidad, dibujan el mundo real con todos sus debates pendientes.

El EZLN, en una doble propuesta de profundas implicaciones, cuestionan en lo político, en lo económico, jurídico e ideológico a las formas de organización de la sociedad que nos ha regido por centenas de años. Logran transformarse en una fuerza política que trasciende con su práctica y su ideología las fronteras mexicanas, impulsando la unión y el fortalecimiento de las expresiones políticas progresistas de todo el mundo. Se vuelven esperanza y ejemplo para los excluidos, y lejos de querer liderarlos, los acicatean para que se incorporen a la lucha.

Esa misma visión impregna su estrategia de masas que consiste en conformar un referente de amplia composición ideológica (pero siempre de izquierda) que núcle a todos los opositores al modelo, y que efectivamente se organice desde la base y en función de diferentes luchas y reivindicaciones; ardua tarea que hoy día se vuelve una exigencia para la sobrevivencia y posibilidades de despegue de una propuesta revolucionaria, y que en el caso del EZLN se ve plasmada en un movimiento heterogéneo y novedoso en su forma, y de una envergadura nada despreciable. Sin perder nunca su carácter antisistema proponen dialogar y consensuar, y negociar al tiempo que empuñan sus armas. No es el radicalismo sesentista, pero sus objetivos son tan radicales como los de entonces y ahí donde se

plantan llevan al máximo de las posibilidades las propuestas que enarbolan, con un notable nivel de dinamismo y creatividad.

La irrupción del EZLN a catalizado a su vez el surgimiento público de otros brotes guerrilleros en México, por ejemplo el del EPR, que es el más conocido pero no el único. Hoy día, aunque se trata por todos los medios de silenciarlo, se sabe que existen varias fuerzas guerrilleras operando en el país, aún cuando son pequeñas y en general de carácter regional. Estas fuerzas aparentemente siguen los patrones tradicionales de las guerrillas latinoamericanas de décadas pasadas, y representan incuestionablemente a sectores profundamente golpeados por el orden social imperante, especialmente a sectores campesinos.

El cuadro político, económico y social mexicano augura una extrema explosividad y radicalización. El crecimiento de la pobreza fruto de las medidas económicas de los últimos años, y el impacto recesivo del TLC (Tratado de Libre Comercio que México suscribió en 1994 con EEUU y Canadá) en la industria, el comercio y sobre todo en el campo, van arrastrando a la desesperación a numerosos mexicanos. Para muchísimas personas delinquir o emigrar, se vuelven casi las únicas opciones para poder sobrevivir. La militarización de varias regiones del país donde esa explosividad social ha dejado de ser una posibilidad para convertirse en una realidad, evidencia la elección que hacen los sectores dominantes: aniquilar, amedrentar y crear terror para sofocar los gérmenes de rebeldía. Pero esa rebeldía crece día a día aun cuando no se plasme todavía en ninguna expresión unitaria (aunque en cierta forma se han venido dando pasos en ese sentido, en una convergencia paulatina de los sectores más combativos, sean sindicales, de organizaciones del campo, universitarios, de organismos sociales, y hasta de la llamada "sociedad civil", ese amplio espectro social no organizado partidariamente). Hay un camino que los mexicanos han empezado a transitar desde hace unos años y que podríamos llamar de mayor nivel de involucramiento socio político.

Por otra parte, es importantísimo destacar el impacto que ha tenido el EZLN en el movimiento indígena mexicano (e inclusive más allá de él). Los zapatistas son la más genuina expresión de una nueva insurrección indígena. Pero también es innegable que han contribuido a aglutinar en pos de reivindicaciones muy claras y sentidas a un movimiento indígena disperso que viene consolidándose desde los años setenta, pero que a la luz de la irrupción zapatista ha ido superando sus divisiones gracias a un conjunto de definiciones ideológicas y de objetivos comunes. Quizás el punto de inflexión de éste proceso que está viviendo el movimiento indígena mexicano se sitúa en los llamados "Acuerdos de San Andrés", firmados por la insurgencia zapatista y por el gobierno en febrero de 1996 en una mesa de diálogo que buscaba establecer acuerdos fundamentales para alcanzar una verdadera paz en el país. En esta mesa se encontraban representados el gobierno y los zapatistas, junto con asesores especialistas para ambas partes (provenientes de un amplio abanico ideológico), mas representantes de distintos sectores de la sociedad y del poder político. Los acuerdos alcanzados, nunca respetados por la parte gubernamental, solo constituían el primer paso, y el primer tema (Derechos y Cultura Indígena) a debatir de una larga lista, que esperaría la sanción del primero para poder avanzar hacia otros asuntos económicos y políticos que involucraban un mayor nivel de complejidad. Y si bien, estos acuerdos en su expresión final no representaban al 100% las expectativas de los zapatistas, y menos aun de gran parte del movimiento indígena mexicano, recibieron el respaldo casi unánime de la población indígena y de amplios y diversos sectores de la población nacional, ya que constituían un avance innegable en términos del reconocimiento legal a la pluriculturalidad de México y a la capacidad política que podían adquirir las poblaciones originarias. Concretamente, lo más importante de esas resoluciones era que establecían los fundamentos para un nuevo esfuerzo de unidad nacional no ya basado en la discriminación, integración forzada y explotación de las minorías

étnicas, sino en su incorporación al país con plenos derechos para poder desarrollar todas sus potencialidades económicas, políticas, sociales y culturales como pueblos. En otras palabras, de concretarse estos acuerdos abrirían la puerta a la realización de una de las demandas más sentidas por los indígenas, la del derecho a la autonomía política (más adelante se debía debatir sobre el carácter concreto de esa autonomía política). Por lo tanto, nadie objetaba que estos acuerdos eran un punto de partida imprescindible, y como tal, se transformaron en una bandera de lucha para el conjunto de las organizaciones indígenas y de diversas expresiones del movimiento político, y social progresista mexicano que reconoció en ellos principios incuestionables de justicia e igualdad. Desde entonces (principios de 1996) la negociación se ha congelado en una tensa tregua, no habiéndose logrado ningún avance... excepto el de los militares, que como clara expresión de la posición del ejecutivo han ido ocupando cada vez más territorio zapatista, apoyando al mismo tiempo a todas las fuerzas represivas, paramilitares y conservadoras de la zona chiapaneca.

MOVIMIENTO INDÍGENA LATINOAMERICANO

Otro actor trascendente de los últimos tiempos es el movimiento indígena latinoamericano. La emergencia de este sujeto social organizado con sus referentes y banderas de lucha propias, con una fuerte autonomía (o por lo menos tendencia a ella) de los partidos políticos, resulta una novedad. Esta independencia partidaria sin embargo no implica cerrazón ideológica; por el contrario, podemos constatar en múltiples ejemplos cómo este movimiento indígena acompaña con notable vigor luchas económicas, sindicales y políticas que los trascienden como etnias, pero los incluyen como parte de los sectores sociales golpeados por las políticas de ajuste macroeconómicas que como una peste se extienden por todos los países latinoamericanos. En general ese movimiento indígena viene formándose desde décadas pasadas, pero es en los últimos años en los que ha adquirido forma y fuerza. Quizás la razón principal de ello esté en los reales riesgos de etnocidio que enfrentan hoy día con el avance neoliberal, ya sea por la expropiación y o explotación inmisericorde de sus territorios, ya sea, por encontrarse ellos mismos entre los sectores más frágiles y discriminados por la “modernidad” que se nos quiere imponer.

Allí donde o son mayoría numérica o tienen una importante presencia demográfica, se han transformado en actores imprescindibles. México, Ecuador, Bolivia, Guatemala son claro ejemplo de ello. En otros países, Chile, Brasil, Costa Rica o Colombia, por ejemplo van consiguiendo hacerse escuchar aun a costa de represión y persecución.

Pero además ellos han logrado poner en el centro del debate público internacional la cuestión de la relación entre los Estados y las poblaciones originarias, tanto en lo referente a las reivindicaciones territoriales de dichos pueblos como en lo concerniente a su integración a las diferentes naciones del continente con derechos políticos, económicos y sociales que reflejen sus cosmovisiones e intereses como pueblos. En este reclamo se condensan los problemas y la direccionalidad de las luchas indígenas. En efecto, lo que hace falta es un amplio debate acerca de las nuevas relaciones entre los estados y los pueblos originarios, debate cuyo punto de partida es la igualdad de derechos para ser diferentes.

LAS LUCHAS EN EL CAMPO

En nuestro continente, una de las piezas clave del resurgimiento de la movilización social se encuentra en el campo: los años 90 se han caracterizado, en muchos países, por un vasto movimiento de ocupación de tierras protagonizado por campesinos sin tierra. También han sido estos sectores, particularmente golpeados

por las medidas de ajuste neoliberal, los que han liderado amplios movimientos de masas.

En Bolivia, el cierre de la mayor parte de las minas, la importación masiva de productos baratos y el contrabando tolerado por el Gobierno han debilitado a los sindicatos mineros e industriales, pero en su lugar, las confederaciones de campesinos, en especial los productores de coca, han protagonizado enfrentamientos de primer orden con el Estado y sus patronos norteamericanos, cortando carreteras y encabezando huelgas generales que han paralizado el país. En Paraguay, la Federación Nacional de Campesinos está detrás de las movilizaciones políticas que bloquean el regreso de los militares y que ponen la cuestión agraria en el centro del debate. En México la mayoría de las principales luchas populares han tenido lugar en el campo: Guerrero, Chiapas, Oaxaca. En Ecuador, Colombia y El Salvador, procesos similares de movilización campesina han pasado a un primer plano para definir el orden del día de la política nacional. Incluso países con poca tradición de movilización campesina, como Argentina, han visto el surgimiento de actores campesinos, pequeños productores afectados seriamente por las políticas neoliberales.

Sin embargo, debe señalarse que no se trata de movimientos campesinos en el sentido tradicional y que los agricultores rurales no están divorciados de la vida y la actividad de las ciudades. Estos nuevos campesinos, algunos a su vez hijos de pequeños agricultores, que recibieron educación primaria o secundaria en muchos casos, provienen de sectores obreros o mineros desplazados por las políticas de ajuste, con una larga experiencia de lucha sindical, lo que los hace tener una visión cosmopolita a pesar de su arraigo en la lucha rural. Otro rasgo a destacar acerca del “nuevo campesinado” es que es políticamente autónomo de cualquiera de los partidos de izquierda existentes, parlamentarios o no, y una gran parte de ellos está comprometido en la acción directa y la actividad extraparlamentaria, como la ocupación de tierras, más que con los procesos electorales. Estos movimientos están fuertemente influenciados por una mezcla de marxismo clásico y, en función del contexto, de influencias étnicas, feministas y ecológicas, por ejemplo en Ecuador y Paraguay, y de forma especial en Bolivia en donde la liberación social y la lucha rural están cuajadas de reivindicaciones étnicas, lingüísticas, culturales e incluso nacionales. Allí, la fusión de dos culturas políticas diferentes ha creado un movimiento que combina formas organizativas, tácticas y estrategias de confrontación propias de la clase proletaria con la demanda de tierra, autonomía cultural y respeto por los valores espirituales tradicionales arraigados en las comunidades campesinas indias.

Pero uno de los aspectos más interesantes a recalcar es que dichos movimientos están tomando conciencia sobre la necesidad y práctica de un internacionalismo efectivo que fortalezca las luchas. Y ese internacionalismo se plasma en instrumentos concretos de coordinación.

CUBA REVOLUCIONARIA, CAMBIOS Y CONSECUENCIAS

Cuba es la mayor fuerza organizada que se le opone al Imperialismo a pesar de las condiciones críticas y complejas que pocos pueblos en el mundo han podido soportar por tanto tiempo. Este increíble combate tan desigual de Cuba frente al imperio más mortífero que ha existido en la historia de la humanidad es tal vez el mejor y el mayor aporte que ese país esté haciendo por el futuro de América Latina.

Esta revolución fue quien sufrió el mayor impacto como resultado de la caída del socialismo soviético. Nadie sabe mejor que los propios cubanos las dramáticas condiciones de vida que soportaron en los años más adversos del 92 al 95. Hoy lentamente salen de sus días más críticos pero a un costo difícil de prever. A través de su historia la revolución ha vivido un proceso de búsqueda, siendo los planes quinquenales previos a 1990 permanentes críticas y correcciones al rumbo

del socialismo cubano. Pero los cambios introducidos después de 1992 nada tienen que ver con tranquilas búsquedas de quinquenio en quinquenio. Se han adoptado un conjunto de medidas que —intentando salvar las conquistas básicas del socialismo— han introducido fórmulas del capitalismo. Entre ellas, destacan la inversión extranjera, la expansión del turismo extranjero, el trabajo por cuenta propia, la liberación del mercado de productos campesinos, y la reforma monetaria que estableció la circulación del dólar de forma paralela y mecanismos de mercado en el funcionamiento de las empresas, así como también en la creación de una vasta red de ofertas “dolarizadas” para el consumo de la población. En Cuba la propiedad cooperativa y estatal siguen siendo abrumadoramente mayores que la propiedad privada tanto nacional como extranjera. El país sigue garantizando de forma gratuita la salud, la educación, la seguridad social y una insuficiente canasta básica de alimentos para sus más de 11 millones de habitantes. Cuba, comparativamente con otros países, aún es un lugar seguro para vivir. La gran interrogante está en el futuro.

Las medidas introducidas y las objetivas carencias materiales que aún subsisten, han cambiado la vida de muchos cubanos. Si bien es cierto que estas medidas junto a un colosal esfuerzo de lucha política del pueblo cubano pudieron detener y revertir la crisis, han provocado el renacimiento de iniquidades olvidadas y han resurgido deformaciones y lacras que parecían superadas. El bienestar material, la recreación y el consumo en general no guardan relación con la calidad y cantidad de trabajo entregado a la sociedad. Las remesas de dólares desde el exterior, el negocio tanto el lícito como el ilegal, entre otros fenómenos, provocan profundas e injustas diferencias de consumo en sectores de la sociedad frente a otros, como el de los trabajadores manuales e intelectuales, obreros, maestros, médicos, científicos, etc. quienes son los pilares de esta sociedad. La corrupción “de menor cuantía” pero extendida por doquier, el robo y tráfico de hormiga, el consumismo, el individualismo, en amplios sectores de la población común son consecuencia inmediata y en aumento, de los cambios. Aún el núcleo fundamental de la revolución la sostiene a punta de valores subjetivos, de entrega y puro sacrificio, pero el tiempo corre a favor de los desvalores introducidos por el capitalismo.

Fidel y muchos cubanos siguen siendo los hombres con que soñaba el Che. Hoy ante un notorio cambio de la política internacional y en medio de sus limitaciones, brindan ayuda a míseros países africanos y americanos con su mejor “ventaja comparativa”, su capital humano. Miles de médicos, enfermeras, educadores, técnicos, entrenadores, etc. colaboran, ayudan, enseñan, salvan vidas sin que por ello medie pago alguno. Sólo los verdaderos humanistas y cristianos pueden entender tamaña conducta. El neoliberal, el individualista forjado en dura competencia no puede entender que se haga tal sacrificio y no se pague por ello. No pueden creer que los cubanos se han traído de África sólo sus muertos, “son cosas de comunistas” señalan para tranquilizar sus conciencias.

Constantemente se acusa a Cuba de violar los derechos humanos. El gobierno chileno se sumó a la banda orquestada por los EEUU para acusar a Cuba en la Conferencia por los DDHH celebrada en Ginebra (1999). La inmensa mayoría de países pobres apoyaron a Cuba, la totalidad de países ricos la condenaron. ¿Cuáles son esos derechos humanos si en Cuba no se tortura, no se desaparece gente, no se arrasa con barrios enteros como hace Israel en la Palestina ocupada?. La culpa aparente es no copiar el modelo político occidental de democracias partidistas. La verdadera esencia: ser profundamente antiimperialistas, haber derrotado a una clase rica que no olvida ni perdona, ser un peligroso ejemplo para los países del tercer mundo al demostrar que sin los EEUU se puede vivir y desarrollar. Y hoy Cuba lo está logrando en medio de las más increíbles dificultades tanto las que impone el gobierno de los EEUU con su absurdo y brutal bloqueo

económico como de las nacidas de sus propios errores producto de un socialismo cubano con reformas que aún se está creando.

Seguramente el sistema político de los cubanos no sea el máximo ejemplo de democracia, pero sí es indudable que con la fórmula que le intentan imponer, nunca países similares a Cuba han mostrado mejores resultados de participación ciudadana ni mucho menos un nivel de vida digno para sus pueblos. A Cuba hay que compararla con países similares en historia, área geográfica y capacidad productiva. Ya quisieran los millones de miserables y postergados de la región alcanzar los niveles de vida política y económica que tienen los cubanos. A algunos cubanos se les olvida esto y su nivel político-económico lo quieren cotejar principalmente con los EEUU. En ese país hay legalmente un Partido Comunista opositor que puede reunirse y decir lo que quiera. No representa ninguna amenaza. Nadie dará nada por ellos a no ser la solidaridad militante. Por eso siguen allí. En Centroamérica cada vez que la oposición revolucionaria ha llegado a ser una amenaza, los muertos, torturados y desaparecidos se cuentan por decenas de miles. En Cuba no existe legalmente un partido u organización opositora a la revolución. Seguro que su sola existencia permitiría que por esa puerta el Imperio desate su fuerza y riqueza a raudales hasta aniquilar la revolución. El monopartidismo no es una opción filosófica ideológica, ha dicho Fidel, es la base de la unidad de un pequeño pueblo como la mejor arma para resistir durante tantos años tan descomunal poder.

LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS EN COLOMBIA

La insurgencia colombiana es sin duda un actor político importante en América Latina. Se trata de las guerrillas más fuertes y más antiguas del continente. Ellos han subsistido a la debacle del socialismo de buena parte del mundo y actualmente, lejos de debilitarse, han dado contundentes muestras de avance.

Hace ya 52 años que, en el marco de una guerra civil, se produjo la insurrección campesina que abrió paso al desarrollo de la fuerza guerrillera que hoy pone en jaque al gobierno y al sistema en Colombia. Según datos aproximados, las FARC-EP cuentan hoy día con 17000 hombres armas en 90 frentes de combate, y el ELN, suman alrededor de 6000 combatientes, en 60 frentes. El EPL por su parte, cuenta con alrededor de 5 frentes. La guerrilla está presente en 500 de los 1.000 municipios del país y está fuertemente arraigada en las regiones más productivas, incluidas las del café, las de plátano y del petróleo, zonas donde cuentan con bases sociales (con diferentes grados de organización) que suman varias centenas de miles de personas.

Sin entrar a analizar este medio siglo de historia lleno de avances y retrocesos, hoy se constata un claro e innegable fortalecimiento de la guerrilla. No es gratuito el despeje y desmilitarización de un área de 42000 km² para las FARC y 5000 km² para el ELN, y las “ansias” del Estado de sentarse a dialogar. Esta consolidación está dada fundamentalmente por dos grandes causas. Las fuerzas revolucionarias han construido pacientemente la base de su poder siguiendo un plan estratégico preciso: la acumulación y consolidación de poder local en las zonas de influencia. Las guerrillas gozan de un alto grado de legitimación en el ámbito local y regional. La mayor parte de los movimientos guerrilleros protegen a los campesinos de la depredación de los militares y de los terratenientes, y respaldan el cultivo de alimentos y los servicios sociales. Hoy su principal compromiso es con la lucha campesina por la reforma agraria y la transformación democrática. La segunda causa es la progresiva descomposición del poder de las clases dominantes, incluido en ello la brutal represión a toda oposición social, el llamado “paramilitarismo”, el narcotráfico y la corrupción generalizada. En el gobierno de Ernesto Samper (1994-98) la elite del poder entró en profundas contradicciones que incluyó la “decertificación” de Colombia por parte de Washington. Esto llevó al gobierno a poner

en marcha una campaña de erradicación de cultivos de coca contra cientos de miles de productores, acción que contribuyó a radicalizar al campesinado y a consolidar sus vínculos con las guerrillas, que así contaron con un mayor número de militantes políticos y militares. Además, el desmembramiento de los viejos cárteles de drogas ha llevado a una mayor competencia entre los nuevos traficantes, los militares y los funcionarios a la hora de repartir las ganancias.

Pero en Colombia existen otros actores políticos importantes. El paramilitarismo, como una fuerza armada más del Estado (pero que sirve para “lavar” la imagen de los militares pues su papel es realizar la actividad más criminal y genocida), tomó notoriedad a partir del año 84 cuando hizo abortar el acuerdo de cese el fuego y la legalización de una fuerza de izquierda agrupada en la Unión Patriótica. Esta organización político social se constituyó en corto tiempo como la tercera del país. Entonces los paramilitares y las fuerzas armadas salieron a la caza de sus miembros, asesinando a tres candidatos a la presidencia, a todos los congresistas, a todos los diputados, a todos los consejeros municipales y a todos los miembros más importantes de dicha organización política. En total, esa campaña de exterminio costó tres mil vidas. Nadie fue nunca llamado a rendir cuentas ante la ley por esas muertes. Hoy en día los paramilitares se han convertido en otros cárteles de la droga, tal vez más fuertes que sus antecesores. Ya en 1995 los narcotraficantes habían comprado fincas en 409 municipios del país. Para finales de 1997, la concentración de la tierra en manos de ellos ascendía a cuatro millones de hectáreas, algo así como el 10% del área más productiva del territorio nacional.

Otro actor político ineludible en el conflicto colombiano es el imperio norteamericano. Con la falsa consigna de “combatir al narcotráfico”, impulsa desde 1999 el llamado “Plan Colombia”. Este plan cuyo costo global ronda los 7500 millones de dólares de los cuales Colombia aporta 4000 millones, tiene un carácter militar. El objetivo del Plan es geopolítico. Su espacio geográfico es el río Putumayo y todo el sur de Colombia. Los dólares están invertidos en equipos militares que incrementarán la capacidad del Ejército colombiano en el combate contra el narcotráfico. Sin embargo, por la zona en que se pretende aplicar, no es necesario hacer un gran esfuerzo para entender contra quiénes va dirigido. El Plan Colombia está concebido para llevar a cabo una guerra prioritaria contra la guerrilla, y los cultivos ilícitos pensados en forma complementaria. También se trata de “quitar el agua al pez”. Al atacar a los productores de la droga y a los cultivadores y sus sembradíos se incrementará el desplazamiento forzoso de campesinos, que sólo en los 10 últimos años ha sobrepasado los dos millones de personas, cuyas tierras pasaron a otros dueños, la mayoría testaferros del paramilitarismo o del narcotráfico. No se descarta la ejecución de bombardeos masivos en las selvas y los ríos por donde se supone la existencia de plantaciones y rutas de narcotráfico, utilizando armas químicas y biológicas que pueden provocar un desastre en el equilibrio ambiental de la selva amazónica, principal reserva ecológica del planeta. Así además EE.UU. boicotea el proceso de diálogo que dice apoyar, tratando de decidir la suerte del país en un escenario de guerra, e intentando llegar a una eventual mesa de conversación con una posición ventajosa.

A pesar de todo esto, las organizaciones revolucionarias han seguido incrementando su poder y su efectividad táctica a tal punto que, por ejemplo, desarrollaron una ofensiva en un mismo período que comprometió alrededor de veinte municipios en nueve departamentos, creando una virtual línea de fuego cercana a Bogotá. Esta operación implicó a dos terceras partes del territorio colombiano, con un desplazamiento de miles de combatientes poseedores de un sorprendente poder de fuego. Estas capacidades dotan al movimiento revolucionario colombiano de ventajosas posiciones de fuerza ante probables escenarios de diálogo y negociación.

Por otra parte comienza una rearticulación de las milicias en las ciudades. Esta actividad ha tenido fuertes altibajos a lo largo de todas estas décadas pues se trata de un terreno que domina el enemigo, es su retaguardia estratégica. La fluctuación de este tipo de lucha ha estado en dependencia del nivel de organización y movilización de las masas urbanas, donde la potencia e influencia de la guerrilla rural tuvo y tendrá un rol catalizador a la hora de cualquier insurrección armada urbana. Los errores cometidos por la organización ya extinta M-19 dejó claras lecciones de lo que significa soslayar esos aspectos e “inventar” insurrecciones.

Las luchas guerrilleras han tenido un carácter principalmente campesino desde sus orígenes. Esto, junto a una concepción de guerra popular prolongada son elementos que pueden ayudar a explicar su gran estabilidad, pero también su lento avance.

Un hecho decisivo en las organizaciones revolucionarias de Colombia es su falta de unidad. Esto sin duda debilita la lucha y ha sido uno de los factores de su alargamiento, influyendo negativamente en las posibilidades de éxito revolucionario. Se enfrentan a un enemigo que está unido y en el terreno militar tiene un mando único. La falta de unidad sigue siendo el “talón de Aquiles” y esto es bien aprovechado por el enemigo que los obliga en estos momentos a negociar por separado. Décadas de combatir sin unidad, han arraigado sus prejuicios y reforzado la idea de que pueden prescindir de otros hermanos de lucha. Incluso la esperanzadora Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, tiene poco o ningún protagonismo hoy. Sin embargo, y como muestra de lo absurdo de esta situación, sus planteamientos políticos son muy coincidentes en cuanto a lo que se debe discutir en un diálogo con el gobierno, enarbolando propuestas para el país acordes a las condiciones internacionales actuales, como una Asamblea Nacional Constituyente, el control del Estado sobre los recursos estratégicos del país, apoyo a la empresa privada, reforma agraria, democratización de los departamentos y municipios del país, creación de nuevas FF.AA., redistribución más justa de la riqueza, etc. La diferencia la da el ELN cuando en sus planteamientos de diálogo coloca como principales participantes a todos los sectores del pueblo, sin exclusiones, siendo ellos como fuerza, un protagonista más, demostrando de esta forma un principio de participación en igualdad para buscar de manera conjunta las mejores soluciones para el país.

En suma, los hechos de los últimos años muestran una tendencia al incremento de la guerra civil, y a un mayor involucramiento del imperio norteamericano. El Plan Colombia en sus objetivos supera los límites de las fronteras colombianas. La probable participación de otros países sudamericanos fortalecerá a los sectores más reaccionarios de nuestro continente y será un excelente momento de los EEUU para consolidar y recuperar el control sobre nuestra región.

Los revolucionarios están conscientes de los nuevos peligros y despliegan sus esfuerzos políticos, diplomáticos por la no intervención extranjera, por el fortalecimiento militar revolucionario y por la imprescindible solidaridad internacional y latinoamericana.

HACIA UNA POSICIÓN LATINOAMERICANISTA

En la década de los 80 y principalmente luego del desastre de los comunistas en Europa del Este, gran parte de las fuerzas políticas de Latinoamérica terminaron por caer en una suerte de síndrome de la derrota colectiva. Los hechos no fueron menores: desde el aplastamiento del Gobierno de la Unidad Popular en 1973, pasando por los diversos fracasos de proyectos nacionalistas en la región, la derrota de los movimientos guerrilleros armados urbanos de la década del 70 que se enfrentaron a las dictaduras, la derrota de la revolución Sandinista, hasta los limitados resultados obtenidos en las negociaciones emprendidas por los

movimientos revolucionarios en Centro América (que sin profundizar en las desfavorables condiciones en que se realizaron, estuvieron muy lejos de las aspiraciones que motivaron décadas de lucha, siendo que su incorporación al sistema con más o menos garantías no guardan correspondencia con las razones que llevaron a miles de combatientes a morir en esas luchas). También es parte de este cuadro general —como consecuencia de la derrota del socialismo soviético— las conocidas repercusiones en los Partidos Comunistas y en la izquierda en general. Importantes partidos nacionalistas, populares y principalmente partidos socialistas se han incorporado plenamente a los gobiernos neoliberales. Ayer ultra revolucionarios, hoy fervientes luchadores del libre mercado. Sucintos enunciados de una compleja situación donde el mínimo común no fue la victoria, se trata de un cuadro de crisis generalizada de la izquierda, crisis de credibilidad de las masas en los partidos tradicionales y sus proyectos, crisis de métodos de trabajo, crisis de alternativas. Toda una generación de revolucionarios vio truncas sus esperanzas después de años de entrega, sacrificios y lucha. El desaliento, el abandono y el individualismo fue la solución de muchos.

El inmenso poder político y militar de los estados y principalmente de las dictaduras fue empleado sin contemplaciones ni escrúpulos a la hora de reprimir y o aniquilar a las fuerzas políticas y sociales que se le opusieron. No era necesario pertenecer a organizaciones armadas para ser objeto de la represión, asesinato y tortura. El mayor número de víctimas de las dictaduras está en las organizaciones sociales y políticas de masas de los pueblos latinoamericanos. Fue una clara muestra de sentido de clase y la unidad que logra la gran burguesía cuando siente amenazada la estabilidad del sistema. Si este fue un factor determinante en la derrota, no menos lo fue el conjunto de errores cometidos principalmente por las direcciones políticas y líderes de todos esos intentos y proyectos de cambios.

Al movimiento revolucionario y la izquierda latinoamericana le es imprescindible recapitular experiencias, analizar cuanto error se cometió y es esencial que los reconozca. No es posible resurgir sin asumir la responsabilidad ante tantos fracasos, ante tantos muertos que cayeron convencidos de la justeza de su actuar. No es posible un sano resurgimiento si otra vez retomamos el “hegemonismo infalible” de las direcciones de las organizaciones que hacían hasta imposible la crítica o un leve señalamiento. Nefasto le fue al movimiento revolucionario el esquema de “dirección nacional orden” más allá de momentos muy específicos. Funesta fue la práctica de la inamovilidad de cargos tanto en los movimientos revolucionarios como en los Partidos Comunistas. No existe ninguna razón teórica ni práctica que avale dicho esquema. Esa práctica del PC de la URSS se transformó en dogma y fue asimilado por la inmensa mayoría de las organizaciones políticas de la izquierda revolucionaria. No es posible permitir que la democracia interna sea envilecida por grupos que manipulan elecciones y congresos y de antemano deciden quién será el “Secretario General”. No puede otra vez la organización política subordinar toda actividad de las organizaciones sociales a sus dictados y postulados teóricos. No podemos unirnos en América sólo por razones de coincidencia ideológica. Tal vez la causa grande o “la causa de las causas” de todos nuestros errores fue desconocer, no admitir, interpretar y aplicar de forma oportunista la democracia. Este error de errores impide escuchar, impide aprovechar al máximo la fuerza del pueblo. La soberbia es quien conduce y se hace imposible corregir el camino. No puede existir democracia mientras se tenga temor de expresar lo que se piensa, a criticar y permitir ser criticado y que ello no encierre represalia alguna. La mejor fuente de sabiduría para acertar en política revolucionaria es conocer a los pueblos y sectores sociales en sus más mínimos detalles, ser parte de ellos, vivir con ellos, sentir con ellos, escuchar a muchos y corregir a tiempo. Y por este camino es que transitan las organizaciones que comienzan lentamente a revivir la esperanza.

Las organizaciones políticas de la izquierda no podemos seguir actuando como si nada hubiera pasado, como si todos los cambios mundiales y regionales que constatamos no afectaran de forma global a los proyectos, a las formas de lucha, a los contenidos y formas de encarar la unidad.

El desmedido poder del Imperio norteamericano tiene un solo límite a su voracidad, y este es la unidad de nuestros pueblos, que debe comenzar por la unidad sólida de sus organizaciones políticas y sociales. Para que esto tenga posibilidades reales de hacerse efectivo es imprescindible una concepción común antiimperialista basada en la historia de las relaciones políticas y económicas que ha tenido los EE.UU. con nuestra región. América Latina tiene mas extensión en superficie que toda América del Norte (incluyendo Canadá). América Latina tiene más habitantes y tantas riquezas naturales como el norte rico. América Latina lo que no tiene es desarrollo económico y un históricamente pobre y limitado sentido de ser latinoamericano. A la región le es imprescindible la unidad, y la razón más profunda de esta necesidad nace en la existencia misma del Imperio. Un poder tan desigual y con conductas tan agresivas, capaz de desatar brutales guerras sin consideración a sus costos humanos ni materiales, es razón de primer orden a considerar en los proyectos políticos. Para ser objeto de agresiones de cualquier tipo o hasta sufrir la invasión del Imperio, los proyectos no necesariamente tienen que ser de carácter socialista. Basta con ser nacionalistas, con querer romper el orden y lugar asignado a nuestros países en la distribución de los poderosos, basta con querer redistribuir mejor las riquezas impidiendo que ésta salga a raudales al extranjero para que el Imperio sienta amenazados sus “intereses y su seguridad”. Las justificaciones para las invasiones se fabrican, en eso son expertos y cuentan con el monopolio casi absoluto de los medios de difusión masiva. Sólo en las últimas décadas varios países latinoamericanos sufrieron agresiones abiertas o encubiertas: Cuba, República Dominicana, Granada, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y otros más que ni siquiera pretendieron construir el socialismo. Ya existen gobiernos en la región que están dispuestos a legitimar las decisiones imperialistas. Siempre estaremos en contra de cualquier intervención norteamericana mucho más si se trata de una agresión armada con costo en vidas para nuestros pueblos. No puede ocurrir otra vez que los EE.UU. invadan militarmente a uno de nuestros países y los revolucionarios apenas llegemos a la mera denuncia. EE.UU. debería saber que cualquier intervención en Latinoamérica tendría altos costos para sus intereses en cualquier rincón de nuestro continente.

Estas consideraciones determinan que nuestra organización debe ser partidaria de una política de unidad que traspase las fronteras del conocimiento mutuo y la solidaridad. El intercambio debe superar los caminos recorridos hasta hoy y llegar al debate político y al intercambio de realidades y proyectos. La reciprocidad debe contener el compartir plenamente las nuevas experiencias que emerjan de la lucha de nuestros pueblos. Hoy, de todas partes de América deberían llegar hombres a los campos de Brasil a vivir la experiencia de los Sin Tierra. La Selva de los Zapatistas ya debiera contar con la presencia permanente de los latinoamericanos. Ecuador, Bolivia, Paraguay, deberían contar con compañeros dispuestos a entregar su participación militante a las luchas que allí se llevan a cabo. Ante una Colombia intervenida, indigna sería una posición contemplativa de los revolucionarios y los pueblos latinoamericanos.

II PARTE: SITUACION POLITICA NACIONAL

CARÁCTER GENERAL DEL PERÍODO

Los acontecimientos que experimenta nuestro país están relacionados con este proceso histórico de imposición del modelo económico neoliberal a escala planetaria

que hemos analizado. Proceso que conlleva contradicciones, expresadas en múltiples formas de resistencia social, a raíz de sus devastadoras consecuencias en las condiciones de vida de la población y en los recursos naturales.

El modelo neoliberal en nuestro país fue instaurado en plena dictadura militar, la que impulsó los cambios estructurales necesarios, económicos, sociales o institucionales, los que posibilitaron una sólida proyección del mismo, más allá de sus efectos sociales nefastos y la resistencia de los sectores sociales directamente afectados, los cuales fueron neutralizados por una represión sostenida y masiva aplicada por el Terrorismo de Estado. El carácter negociado de la salida de la dictadura, dejó intacta la estructura constitucional pinochetista lo que permite a las FFAA poseer un rol político determinante hasta el día de hoy.

Es incuestionable que el pueblo votó en 1988 por el retorno a la democracia, pero también lo es que no se votó por una democracia elitista ni por los elementos fundamentales que sostienen el sistema. Si el programa de gobierno civil contenía diversas indicaciones que apuntaban hacia una democracia de consensos, estas no eran las únicas y no eran suficientemente explícitas como para imputarlas al sentido de la votación popular. El diseño de esta estrategia conllevó la alteración desde arriba del movimiento social, e incentivó los acuerdos y consensos en la lucha de clases. El objetivo fue alterar la conciencia política del pueblo, mediante instituciones estructuradas para limitar y controlar las consecuencias de la explotación y la injusticia. Esto ha generado una ruptura con el mundo de las reivindicaciones sociales que tienden así a permanecer separadas del espacio político y a la conformación de un nuevo estilo de organización social destinada más a canalizar y limitar las demandas sociales vistas como amenaza de polarización, a representarlas y expresarlas en los marcos institucionales. En esta concepción, la democracia que funda a este modelo se transforma en una postergación del ideal democrático mismo, a través de la construcción de un orden social que mantiene el statu quo dictatorial de una manera estable.

El sistema se auto define políticamente como un Estado de Derecho que da garantía de la más plena libertad y participación, pero en la práctica concreta las niega, resolviendo todo mediante la política neutralizadora de los consensos entre las cúpulas de los actores empresariales, políticos militares y sociales. Es la nueva fórmula neoliberal de gobernar donde todo es negociable.

Al mismo tiempo, la inmensa mayoría de la población es espectadora de las grandes decisiones y sufre sus más nefastos efectos: la creciente violencia resultado de la desigualdad social que condena a cientos de miles de jóvenes al consumo de la pasta base derivado del tráfico organizado desde las mafias vinculadas al poder económico, a la clase política y las policías; la delincuencia y la prostitución infantil y juvenil, en medio de la deserción escolar y falta de acceso a la educación; la carencia de salud y vivienda, la cesantía creciente y la sobre explotación de los trabajadores, un medio ambiente contaminado y la destrucción de los recursos naturales.

Por otra parte, el modelo genera una injusta distribución de la riqueza. Sólo un sector de la población chilena, el 20%, concentra el 58% de los ingresos del PBI, mientras el 20% más pobre, sólo accede al 3%. Millones se empobrecen o son condenados a la exclusión por el modelo económico, que se asienta en un coherente modelo político administrado por sectores derechistas disfrazados de socialdemócratas y en donde las FFAA cumplen un rol garante del proyecto trazado. En el plano ideológico prima una mentalidad individualista, y consumista, agravada por el endeudamiento generalizado basado en los mitos del progreso y desarrollo económico.

La política estatal para enfrentar los problemas sociales es la de fortalecer la represión. Así se destina más presupuesto para la construcción de cárceles que esperan una población penal creciente, más presupuesto y recursos para las fuerzas

policiales, más leyes que castiguen a los pobres, reformas legales para penalizar a los niños y jóvenes por los “delitos” de sobrevivencia que el propio sistema genera. Por otro lado, el andamiaje del régimen político contempla la vigencia de la Ley Antiterrorista y de Seguridad Interior del Estado, como soporte legal a un régimen de características policiales, enmascarando la política represiva y de control social en la ley de “Seguridad Ciudadana” a través de la cual encuentra su aceptación en la sociedad.

La situación actual del movimiento popular chileno, es el resultado de la derrota sufrida en su lucha contra la dictadura. Todas las formas organizativas y las experiencias combativas acumuladas en esos años, no fueron capaces de dar impulso a una salida popular. Fueron estos sectores los que sufrieron mayoritariamente la desaparición, ejecución, torturas, prisión y exilio, así como las consecuencias del empobrecimiento por el modelo implantado. Por el contrario, fueron la burguesía y sus partidos los que capitalizaron la lucha del pueblo y negociaron un proyecto que resguarda sus intereses de clase.

Los sectores populares atomizados aún por las consecuencias de la derrota, hacen esfuerzos por abrirse paso en este escenario, buscando sus propios caminos de organización desde la base, ligados a las demandas sociales, lidiando con una cultura del consumo y de la pérdida de sueños. Ya se vislumbran muestras de una lenta rearticulación social que es diversa, dispersa y contestataria, sin que ello le reste perspectiva, un potencial en construcción para una resistencia organizada frente al neoliberalismo.

Vemos así que las contradicciones principales en la sociedad chilena se expresan, en lo político, en la existencia de un régimen de gobiernos civiles que operan bajo la institucionalidad represiva; y en lo económico-social, a través de la brecha cada vez más grande entre crecimiento económico y justicia social. El llamado desarrollo del país está constituido por las desmesuradas ganancias del empresariado transnacional y criollo generadas a costa de la explotación y atropello de los derechos económicos y sociales de la mayoría del pueblo.

Mientras nuestra “democracia” tenga esa base de sustento, estará incubando cambios revolucionarios en el más amplio sentido del concepto.

LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL LA ESTRATEGIA DE LA CLASE DOMINANTE

La estrategia de crecimiento de la economía chilena es su inserción plena en el escenario mundial. Somos parte de la “globalización” del neoliberalismo que posterior a los años 80 se articula a las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que junto a las grandes potencias han logrado una nueva división del trabajo en el planeta. En esencia nuestro país seguirá siendo productor de materias primas no renovables cumpliendo el rol asignado en la economía capitalista mundial. A la cabeza de este proceso, casi sin contrapeso, se sitúan aquellos sectores mercantiles y financieros chilenos ligados a las grandes transnacionales y al polo financiero mundial que son hoy los grupos que controlan el comercio y la economía mundial.

La actuación de estos sectores criollos, como a fines del siglo XIX, se realiza con un Estado absolutamente subordinado a sus exigencias. El rol asumido por el Estado desde la década del 30 a través de sus gobernantes e instituciones, de controlador capitalista monopólico del comercio, la producción, el transporte, la infraestructura, la energía, etc., es tomado ahora de manera directa por la empresa privada nacional y sobre todo por las empresas transnacionales. Y esto es así debido a que el agotamiento de la estrategia capitalista en la década del 70 confluyó en una nueva modalidad que se estructura bajo el neoliberalismo la que levanta las banderas del crecimiento como única forma de superar la pobreza y el estancamiento económico de los países subdesarrollados, asumiendo como principal

estorbo para esa dinámica, al rol económico, productivo y social del Estado, y definiendo como principal herramienta al mercado y como actor político indiscutido al empresariado.

De esta forma, pasamos del modelo de industrialización progresiva sustitutiva de importaciones, también llamado “Estado de Bienestar” responsable de la limitada pero existente educación, salud, previsión, entre otros servicios, a un modelo en el que Chile se posiciona como un país exportador de materias primas con muy poco valor agregado, con una economía completamente abierta. En este modelo, el mercado se transforma en el principal asignador de recursos tanto los de la producción como en lo referente a los servicios que la sociedad requiere. Ha sido el mismo Estado, con la conducción política de la dictadura militar y luego de la Concertación, quién en un breve período ha comandado su propia reconversión. La acción estatal busca facilitar el desarrollo de esta lógica ajustando la institucionalidad interna, aumentando espacios de acción a las fuerzas del mercado y del empresariado, abriendo las fronteras para posibilitar el ingreso y actuación de los consorcios extranjeros, reduciendo, encuadrando y reprimiendo al movimiento social. Así, hoy día se aprecian las inmensas prerrogativas que los grandes grupos económicos transnacionales tienen para establecerse o profundizar su presencia en el país. Esto es: la baja de los aranceles, la privatización de empresas estatales, la liberalización de los mercados, y el debilitamiento de las organizaciones sindicales, solo para citar algunos ejemplos.

Por último, como un antecedente a considerar en todo este modelo económico que sólo favorece a los empresarios privados y a las grandes potencias a costa de la creciente desigualdad y empobrecimiento de los chilenos, la deuda externa de nuestro país alcanzó el 30 de junio del 2000 un saldo de 35.094 millones de dólares, lo que significó un aumento de 882 millones con relación a diciembre de 1999, según informe del propio Banco Central. El 85% del total de la deuda externa es privada y el resto es estatal.

La economía nacional se sustenta en las exportaciones de 3.788 productos diferentes, sin embargo, sólo 10 de ellos concentran el 51,1% de los U\$\$ 15.913 millones que vende el país al exterior. Los principales productos de exportación ordenados según los ingresos son: Cátodos de cobre, minerales de cobre y sus concentrados, uvas, celulosa de coníferas semi blanqueados, vinos de origen, tablas aserradas de pino insigne, harina de pescado, salmones pacífico congelado, manzanas frescas y oro en bruto.

La estructura social del país evidentemente ha sufrido transformaciones profundas con la imposición del modelo. Entre los sectores dominantes se han visto surgir nuevos perfiles a través de procesos de adaptación al actual esquema como también a través de la aparición de un nuevo tipo de empresario propio del modelo.

En Chile, la burguesía no se formó en una tradición fabril (industrial) sino en el contexto de un capitalismo aventurero (minería) y luego protegido por el Estado en la fase de industrialización. En este proceso la burguesía nacional mantuvo siempre una fuerte relación con la clase terrateniente (de hecho el origen del empresariado chileno del siglo XX está vinculado al traspaso de capitales agrícolas al sector industrial). El predominio de esta última en lo que respecta a la proyección política de esta alianza, explica el conservadurismo cultural y político que define a la burguesía chilena como esencialmente reaccionaria y dispuesta a organizar y transgredir su propia institucionalidad las veces que sea necesario.

A partir de la aplicación del programa neoliberal se establece una nueva relación de la burguesía con el Estado. La crisis del 82, en plena dictadura, potenció su depuración por medio de la competitividad, provocando la quiebra de un importante grupo de empresas especialmente vinculadas a labores manufactureras que sintieron el peso de la apertura a los mercados. Por entonces, también se agudiza el ingreso de las transnacionales que comienzan a articularse al capital

nacional en un pacto más intenso, generando la conformación de grandes conglomerados que se orientan a la captación de las empresas estatales privatizadas, servicios privatizados (previsión, salud, educación) y a aquellos sectores productivos vinculados a los recursos naturales de rápida penetración en el mercado internacional: fruticultura, minería, madera, comunicaciones, etc.

Surge así una gran burguesía mucho más cosmopolita y agresiva que hoy se encuentra en expansión. Este gran empresariado es el que conforma los grupos económicos nacionales en asociación con el capital extranjero y compone la clase política empresarial, la que asume su rol conductor y pilar del desarrollo neoliberal del país. Otro actor social importante que surge bajo el nuevo modelo es el llamado empresario competitivo o de mercado, que se constituye en torno a la pequeña y mediana empresa vinculada a los sectores más dinámicos de la economía que casi en su totalidad están orientados hacia el exterior. Hombres de empresa que se “arriesgan”, “exitosos” y que al igual que el gran empresariado, reivindican su aporte al desarrollo del país exigiéndole a la sociedad respeto y devoción. Hoy podríamos decir que los partidos políticos neoliberales, en general, representan a estos dos segmentos sociales, lo cual no excluye que en su seno se produzcan pugnas políticas de conglomerados. Y por último, existe un importante sector de la burguesía orientada hacia el mercado interno que no ha logrado “modernizarse” completamente y que no está preparada para escenarios de apertura de mercados (agricultura, sectores manufactureros, etc.). Estos buscan su desarrollo a través de subsidios estatales.

LOS SECTORES POPULARES

Los trabajadores han visto a su realidad transformarse de forma traumática. Hasta el año 73 la fuerza de trabajo tenía una fuerte participación en el sector industrial; mientras que el sector de servicios se articulaba principalmente en torno a la función pública estatal. Entre el 75-83 el proceso de desindustrialización de la economía chilena, la crisis del 82, el traspaso de una economía orientada hacia el mercado interno a una destinada al mercado internacional, más la reducción del sector público significó una fuerte expulsión de mano de obra asalariada al campo de la cesantía y la economía informal. Es en aquella época y al calor de ese ciclo que el sector obrero comienza a disminuir en cantidad (número) y en calidad (localización en la cadena productiva).

Durante la década de los 90 y hasta hoy, las administraciones de los tres gobiernos concertacionistas han buscado consolidar la subordinación de los trabajadores a los requerimientos del modelo a través de la legitimación y profundización de la aplicación del concepto de flexibilización del trabajo. Así, hoy se aprecia un llamado “mercado laboral” absolutamente descentralizado y abierto a los avatares del mercado tanto en sus regulaciones legales como en la realidad productiva, constituyéndose éste con un nuevo perfil que se caracteriza por la existencia de un núcleo decreciente de trabajadores estables con altos niveles de calificación, junto con un número creciente de trabajadores con empleo transitorio, y menor remuneración y seguridad en el empleo.

La fuerza laboral la constituyen alrededor de 5.404.480 de personas, de las cuales la CUT y otros estudios reconocen la existencia de más de un millón de cesantes. Estas cifras no consideran los trabajadores informales. A esta realidad debemos sumarle la creciente fuerza de trabajo que está constituida por niños y adolescentes, 125 mil entre 6 y 18 años de edad.

La estrategia asumida por los gobiernos está orientada a “planes de combate al desempleo” que se limitan a capacitación laboral para crear una pequeña cantidad de mano de obra de bajo costo, menos calificada, y a contener los índices de cesantía a través de organismos como el FOSIS. Al mismo tiempo, la política social se dirige a

contener las estadísticas de la indigencia y a neutralizar la pobreza que se masifica en los sectores sociales medios y bajos.

De esta forma, la modalidad de crecimiento de la economía chilena se ha realizado sobre la base de un enorme contingente que subsiste con un tipo de trabajo frágil e informal. Aumentando las subcontrataciones y los contratos temporales que hacen mucho más rentable y segura la labor del empresario. Esta fuerza de trabajo se ve sometida a jornadas laborales de entre 12 y 16 horas.

La masa de trabajadores informales se caracteriza por poseer un alto porcentaje de mujeres y jóvenes cuya presión por acceder al mundo laboral ha mantenido a raya el alza de los salarios. Tenemos entonces que mientras los niveles de productividad han aumentado y con ello el crecimiento de la economía, la mano de obra no ve incrementados sus salarios en términos reales, produciéndose otra de las características del funcionamiento estructural del actual patrón de acumulación: el aumento de la tasa de explotación de los trabajadores. El modelo entonces, estructuralmente genera pobreza y concentración de la riqueza.

Y el proceso se completa en una perversa maquinaria del consumo. El tiempo libre se convierte en un espacio de apropiación de los escuálidos salarios de los trabajadores, endeudados, alienados, evadidos de una realidad que los devora.

LA SUPERESTRUCTURA POLÍTICA. ANDAMIAJE INSTITUCIONAL

La esencia de toda la estructuración política se basa en la fraudulenta Constitución del 80 de la Dictadura. De allí se desprenden todos los rasgos antidemocráticos, discriminatorios y mañosos que hoy pesan sobre la sociedad.

El primer elemento a analizar es el de nuestro sistema electoral antidemocrático. Dentro del ámbito político-partidista, las elecciones presidenciales (cada 6 años) junto con las parlamentarias y senatoriales, representan la legitimación social de esa institucionalidad política y jurídica y de su base económica actual. El sistema está diseñado para cerrar el paso o bien para absorber expresiones alternativas en el terreno electoral, en cuya legalidad no existen las mínimas garantías para la expresión real de la soberanía popular. Desde el marco legal todo esta preparado para que no sea posible alterarlo. Para ello existe el sistema electoral binominal, y la ley de partidos políticos. La democracia representativa queda reducida a esta participación en el voto electoral. No existen posibilidades de control por parte de la sociedad de los representantes del poder, ni incidencia en las políticas que estos aplican en el país.

La conciencia política del conjunto social es reflejo del monopolio político, económico e ideológico que impera hoy día en nuestro país, el que pretende arrinconar al pueblo en luchas parciales y electoralistas, pero a la vez asegurando que por esa vía nunca se llegue a desestabilizar el modelo. Se impone en el sentido común del pueblo que no hay más opción que el neoliberalismo.

De ahí la creciente indiferencia que se expresa en cada show electoral. Los candidatos son elegidos por las cúpulas de las grandes coaliciones políticas, las que tienen un programa prácticamente común. La verdadera e indiscutida disputa está en el campo administrativo. Las fuerzas extra parlamentarias de izquierda no tienen posibilidad alguna de acceder al gobierno, y cuando lo hacen son absorbidos por esta maquinaria, transformándose en una minoría condicionada a los proyectos dominantes.

Un tercio de los electores elige la misma cantidad de representantes que los dos tercios restantes, en virtud de la ley 18.700 dictada con posterioridad al plebiscito de 1988. Esta ley establece el sistema binominal para elegir los 120 diputados de la Cámara y los 38 miembros electos del Senado (de los 48 que la componen a partir del 11 de marzo de 1998). Dicha ley definió asimismo la conformación geográfica de los 60 distritos electorales para la elección de diputados. Cada distrito o circunscripción elige dos parlamentarios, diputados o senadores. La

lista ganadora elige los dos cargos siempre y cuando sume más del doble de votos que la segunda. La segunda lista elegirá uno de los cargos. Por ejemplo, una lista triunfadora con cien mil votos sólo puede elegir un cargo parlamentario, mientras que la segunda lista, ampliamente vencida pues cuenta con sólo 50.000 votos elige también un candidato. Porcentualmente, entonces, la derrotada minoría del 33% obtendrá la misma representación parlamentaria que la aplastante mayoría del 66%. Esto significa que cada voto ciudadano de la minoría vale el doble que cada voto ciudadano de la mayoría.

Por último, la Constitución chilena establece la existencia de 9 senadores designados: 4 ex generales de las Fuerzas Armadas por derecho propio y el Presidente de la República designa a dos (1 representante del gobierno y 1 ex contralor de la República), 1 ex rector de universidad y 2 ministros de la Corte Suprema elegidos por ésta en votación individual unánime. A lo que se suma la figura de los senadores vitalicios (los ex presidentes).

Un elemento imprescindible a destacar dentro de este andamiaje institucional, es el rol político y vigilante de las FFAA sobre la sociedad. La Constitución del 80 en su capítulo décimo plantea que las FFAA “existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República”, o sea, vigilan su orden. Además los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas gozan de inamovilidad respecto a sus cargos. Es decir, ni siquiera el Presidente del país puede removerlos.

Por otra parte, existe el Consejo de Seguridad Nacional -COSENA- una institución creada por la dictadura y en donde participan, además del Presidente, los jefes de las FF.AA y de Orden, el presidente del Senado, de la Corte Suprema y el Contralor General de la República. Este organismo puede ser convocado por el Presidente o por dos de sus miembros, y tiene como misión la vigilancia contra todo aquello que pueda atentar contra “las bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional”. La correlación de fuerzas en su interior, tanto numérica como política, hace que durante su sesión el Jefe de Estado, en la práctica, no sea el Presidente.

Todo lo dicho posibilita al poder militar de influir en organismos de carácter jurídico como es el Tribunal Constitucional (TC). La importancia de este tribunal radica en las atribuciones que tiene en la regulación de leyes constitucionales (por ejemplo reformas) y en el control de la “constitucionalidad” (legalidad) de los decretos con fuerza de ley.

También debemos citar a la Justicia Militar que permite tanto la impunidad de los crímenes de la dictadura como el poder de juzgar y condenar a civiles, en particular militantes de organizaciones revolucionarias y luchadores sociales, produciéndose la aberración de que una persona sea juzgada doblemente y con condenas sumatorias por los tribunales civiles y militares, en virtud de la Ley Antiterrorista y de Control de Armas y Explosivos.

Así como el sistema se caracteriza por el rol tutelar de las FF.AA en la vida política nacional, contempla también el fortalecimiento de éstas en términos materiales. En efecto, el Pinochetismo y la Concertación han desarrollado una vasta operación de crecimiento del poder bélico ofensivo y defensivo de la fuerza militar chilena, bajo una concepción doctrinaria que mantiene las hipótesis de la existencia de un conflicto interno potencial que requiere del control político de los militares sobre el mundo civil, con un ejército autónómico, que se sitúa por sobre la sociedad y debe estar permanentemente preparado para resguardar la “seguridad del Estado”. Las bases que sustentan este fortalecimiento operativo son: el desarrollo del complejo militar industrial (ASMAR, FAMAE y ENAER) y un elevado presupuesto que contempla el 10% de las utilidades de CODELCO. Proporcionalmente el gasto militar chileno alcanza, según estimación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, al 4 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), que es él más alto de

América Latina, igualando al presupuesto total de Educación y superando también al de salud, que es el más bajo de América Latina.

Vemos así, que la principal característica de los gobiernos de la Concertación ha sido su adhesión absoluta al modelo y a sus bases de sustentación. Por eso, para ellos, la plena inserción internacional es vista como el obstáculo cuya superación permitirá dar el salto hacia un país “desarrollado y moderno”, liderado por la nueva clase empresarial ya mencionada, que se propone enfrentar el siglo XXI con niveles de crecimiento superiores, algo imposible sin su participación como actor fundamental. Indudablemente, para que las cosas se den así, ha sido imprescindible la derrota sufrida por el pueblo a partir del año 86, porque la debilidad de actores políticos y sociales populares ha dejado cancha libre para que la clase política “de mercado”, imponga su proyecto en el país.

A partir de todo lo dicho, podemos comprender que la tan mentada “Transición” no es más que un conjunto de medidas político institucionales que comienzan a ser impulsadas por sectores de la clase dominante en la segunda mitad de los 80 y que se han fortalecido con los gobiernos civiles, y cuya finalidad es el mantenimiento y perfeccionamiento de las bases del neoliberalismo. La retórica no logra esconder que la “Transición” no es más que la legitimación social y salvaguarda de las bases institucionales del modelo.

Los gobiernos ejercen su poder con plena participación de los sectores opositores (la ya conocida franja “liberal” que cruza el arco político, constituida por la UDI, RN, DC, PR, PS-PPD), bajo el esquema de acuerdos superestructurales. No hay proyectos sustancialmente diferentes entre la Derecha y la Concertación, de hecho son una alianza estratégica para conducir el proyecto de país integrado a la economía globalizada. La derechización de los partidos políticos que conforman la Concertación de Gobierno, influida por los intereses de clase que defienden sus miembros, se ha impregnado del conservadurismo histórico de la derecha reaccionaria. Así podemos explicarnos la defensa que han hecho al dictador, a las leyes de impunidad, a la represión a las movilizaciones sociales, al sancionamiento a Cuba por supuestas violaciones a los derechos humanos, a los proyectos de reformas laborales, a la penalización del aborto, a la inexistencia del divorcio legal, a la persecución a las minorías sexuales y todo lo que hemos señalado en cuanto al marco institucional.

DERECHOS HUMANOS Y TRANSICIÓN LA INCIDENCIA DE LA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL (DSN) EN EL ESTADO CHILENO

La DSN es una clara expresión política de la ideología imperialista y fue elaborada en los Estados Unidos tras el triunfo de la revolución cubana en 1959 y del desarrollo de los movimientos de liberación que surgieron en el continente. Constituye el fundamento ideológico del terrorismo de Estado y de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras militares en toda América Latina en la década de los 70 y 80. Según la definición del Pentágono, la DSN es el conjunto de “medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas tomadas por los gobiernos para vencer la insurgencia subversiva”. Desde esta perspectiva, las dictaduras militares fueron un instrumento de expansión del imperialismo en su guerra contra el comunismo y/o el “enemigo interno” que atentaba contra sus intereses en el continente.

La DSN transformó la naturaleza del Estado. El llamado “Estado de Seguridad Nacional” se tradujo en Chile en el conocido “Estado de Excepción”, el que operó a través de formas ilegales y/o al margen de la legalidad institucional tradicional. Por ello la impunidad es un elemento intrínseco a su naturaleza. Por otra parte, la idea de “guerra permanente” se construyó sobre concepciones políticas y técnicas favorables a los intereses del gran capital, en la militarización del aparato

del Estado, y en la creación de una ideología de la inseguridad que define la “seguridad de la nación” como un objetivo superior.

La DSN además incidió sobre las estructuras jurídicas, sustituyendo las que se consideraban ineficaces, débiles y obsoletas respecto del orden represivo y el control social que se requería y aceptando la utilización de organizaciones de carácter clandestino y de métodos ilícitos rechazados por el ordenamiento jurídico tradicional.

Por último, la DSN sirvió para propagandizar una sensación de inseguridad permanente a través de los medios de comunicación y las intervenciones públicas de los políticos oficialistas, generalizando una situación ficticia de peligro y multiplicando miedos abstractos enmarcados en estereotipos, y promoviendo la aceptación de la eliminación del otro como un medio legítimo para lograr la seguridad, lo que llevó a la justificación ideológica de crímenes aberrantes.

DEL TERRORISMO DE ESTADO A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA

En el traspaso formal de la dictadura militar al gobierno civil, la DSN evolucionó hacia el concepto de “Seguridad Ciudadana”, debido a los requerimientos actuales de cautelación del orden vigente no restringidos a políticas puramente represivas. Así, a partir del primer gobierno civil se implementa un Estado con características policiales sustentado en una legislación especial.

En estos años ha quedado en evidencia que, para el sistema, el mayor de los peligros lo constituye la agitación social derivada del descontento de los sectores afectados por las políticas económicas y sociales. Por ello los distintos gobiernos civiles han promovido una gestión fuerte del orden público, lo que implica la entrega de amplias facultades a los organismos represivos, aún a costa de conculcar muchas veces los derechos de las personas. La política de Seguridad Ciudadana ha contemplado, entre otros aspectos, el aumento de las penas, la construcción de más recintos penitenciarios y cárceles de máxima seguridad (estas últimas destinadas a destruir las convicciones ideológicas y a aislar socialmente a los presos políticos), la tipificación de nuevas conductas delictivas y la creación de mayores atribuciones represivas. Los servicios de inteligencia se consagran a recabar información que les permita detectar cualquier forma de descontento popular siendo comunes las interceptaciones telefónicas o de correo, la infiltración, y los sistemas de delación y recompensa, entre otras modalidades. Por su parte, los poderes de la policía y de los tribunales para limitar la capacidad de defensa de los detenidos se amplían, al punto de infringir dos derechos absolutos: la prohibición de la tortura y el derecho de todo acusado a un juicio justo. El uso de métodos propios del período dictatorial como la delación compensada y de agentes infiltrados, los allanamientos sin orden judicial, aleatorios, o el montaje de operativos falsos, revelan los elementos de continuismo “en democracia” en materia de “seguridad interna”.

Las actividades de inteligencia y el desarrollo de una política de represión de la subversión y los conflictos sociales se dirigen directamente desde el Ministerio del Interior y desde la llamada “Oficina” (actual Dispi).

Para implementar la política de Seguridad Ciudadana, la Concertación adoptó un conjunto de iniciativas, entre las cuáles podemos mencionar:

- a) La reestructuración de las fuerzas policiales basada en la especialización de sus funciones, conjuntamente con un reforzamiento operativo particularmente evidente en las formas de militarización encubierta que caracteriza a algunos cuerpos especializados de la policía.
- b) Las labores de inteligencia constituyen un aspecto relevante de la actividad represiva. Para facilitar su proceso de modernización, el gobierno les asigna elevados presupuestos.

- c) El consenso político y social en torno a la Seguridad Ciudadana constituye un punto crucial para los gobiernos civiles. De los niveles de consenso alcanzados en la ciudadanía depende la forma como las fuerzas represivas enfrentan el fenómeno de la disidencia política. Por ello, mediante un amplio despliegue comunicacional se instaló en la sociedad la idea de que había un incremento de la delincuencia y de que era necesario “defender a la sociedad”, convocando además a los ciudadanos a participar en las medidas preventivas, informativas y represivas del Estado.

Así, en el discurso de las autoridades políticas y policiales, el concepto de guerra permanente, propio de la DSN, adquiere la forma de “guerra al delito” o “guerra al crimen”. Al mismo tiempo, se imponen trabas a la excarcelación de presos políticos, dirigentes sociales e indígenas y se aplican leyes draconianas (como la Ley N° 18.314 de conductas terroristas) sobre la base de la supuesta “peligrosidad” social de estas personas.

- d) En el plano internacional, y por lo general en desmedro de la soberanía de los Estados implementan estrategias de coordinación para luchar contra los “nuevos” peligros, tanto en el plano ideológico como operativo. Surgen nuevos conceptos para la educación ideológica de la población que identifican, por ejemplo, la insurgencia con el “narcoterrorismo”. Se organizan encuentros internacionales destinados a la cooperación en la represión, se firman tratados, y convenciones que suprimen las restricciones fronterizas a la intervención policial directa y la investigación de los organismos de inteligencia los cuales trabajan conjuntamente con las policías y organismos especializados en los distintos países de América.

LOS GOBIERNOS CIVILES SIGUEN VIOLANDO LOS DERECHOS HUMANOS

Las violaciones a los Derechos Humanos no pueden abordarse sino desde una perspectiva histórica y social, por cuanto estas violaciones son el resultado de los conflictos que enfrentan a los individuos con el Estado, las cuales no derivan exclusivamente de las características más o menos represivas de éste, sino de la confrontación entre clases sociales. Desde esta perspectiva entonces, las violaciones a los derechos humanos tienen que ver con el conjunto de la sociedad, tanto en lo referente a los derechos políticos e individuales como también a los derechos económicos y sociales.

La estrategia de la impunidad en la transición chilena

En general, la ideología dominante impuso en toda Latinoamérica un enfoque ahistórico de las violaciones a los DDHH, por medio de mecanismos que apuntan a ocultarlas, omitirlas o tergiversarlas. Principalmente se intenta disociarlas de la estructura de clase de los Estados que, bajo la forma de dictaduras militares, dominó a gran parte del continente en la década de los 70. De ahí que, en las estrategias políticas antidictatoriales haya prevalecido la idea de que la sociedad estaba confrontada por dos modelos políticos contrapuestos —democracia liberal y dictadura militar— lo que se expresó en Chile en la idea-fuerza “dictadura o democracia”. Según esta lógica, para recuperar la democracia era necesario conformar un amplio frente de lucha cuya reivindicación principal era la política electoral liberal. Como se decía entonces: “se podía desplazar a la dictadura ¡con un lápiz!”

En nuestro país, en el plano teórico-político, los intelectuales oficialistas definieron la “transición” como un proceso con etapas definidas cuyo curso sería

difícil de alterar dada la correlación de fuerzas que le habían dado origen. La impunidad fue aceptada a priori mediante pactos implícitos –hoy día cada vez más explícitos- que se negociaron a espaldas de la sociedad, sobre la base de la aceptación de la existencia de “poderes fácticos” - contrarios al ejercicio de la soberanía popular- y con el monopolio comunicacional del tema.

Así, en estos años, la impunidad se impulsó desde todos los frentes institucionales: ejecutivo, legislativo y judicial. Para institucionalizarla y sobre la base de la fórmula “justicia en la medida de la posible” el gobierno de Aylwin creó la Comisión Verdad y Reconciliación (o Comisión Rettig). El Informe admitió la existencia de detenidos-desaparecidos y ejecutados, lo que permitió el reconocimiento moral de las víctimas, reparaciones económicas y gestos simbólicos del Estado, como la construcción del Memorial del Desaparecido en el Cementerio General. No obstante, dicho informe sólo admitió una mínima parte de las atrocidades cometidas, sin considerar la situación de centenares de miles de chilenos que pasaron por campos de concentración, por la tortura, la prisión política, el exilio, la exoneración de sus puestos de trabajo, etc. Además, no individualizó a los responsables materiales de las violaciones a los Derechos Humanos ni condenó al Estado que las legitimó. El informe Rettig no significó ningún avance en el enjuiciamiento y castigo de los criminales.

La transición pactada fijó los fundamentos políticos y jurídicos que permitieran la impunidad a las violaciones de los DDHH cometidas durante la dictadura militar.

El principal fundamento político de la impunidad es la aceptación y permanencia de la institucionalidad antidemocrática instalada por la dictadura.

Por su parte, los fundamentos jurídicos de la impunidad son principalmente:

- El Decreto Ley 2.191 de amnistía que cubre los hechos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1978 o la prescripción en esta clase de juicios como mecanismo de extinción de la responsabilidad penal.
- La aplicación de la Cosa Juzgada, que da paso a la arbitrariedad por lo que impide un juicio justo.
- El sistema de nombramientos del Poder Judicial –ratificados por el Senado.
- Las atribuciones amplias que dispone la Justicia Militar y su negativa a investigar y sancionar a los funcionarios policiales responsables de violaciones de los DDHH y abusos de poder.
- La ley del secreto, que tiene como objetivo cerrar los procesos judiciales de los detenidos desaparecidos encontrando, si es posible, los restos de los mismos con información de las fuerzas armadas, esclareciendo dónde los mantuvieron detenidos, y asegurando en el mismo acto la aplicación de la ley de amnistía a los miembros de las instituciones armadas que participaron de manera directa o indirecta en los hechos. Mientras no se encuentren los cuerpos, el delito de desaparición forzada o secuestro se sigue cometiendo y los juicios a miembros de las FFAA y civiles continúan, por eso la necesidad del gobierno de encontrar osamentas. Es interesante señalar que la iglesia funciona como intermediaria a la hora de recibir la información, para luego derivarla directamente al ejecutivo, quién luego la entrega al poder judicial.

No menos importantes para la imposición de la impunidad han sido los consensos comunicacionales destinados a imponer un dispositivo amnésico y tergiversador respecto de nuestra historia reciente. Se busca imponer la idea de que

el orden institucional y jurídico vigente es el único posible y blanquear la imagen de las Fuerzas Armadas incluso llegando a responsabilizar al Gobierno de la Unidad Popular del Golpe de estado. Piedra angular de esta propaganda es la campaña por el perdón y la reconciliación impulsada por la Iglesia católica.

La postura estatal de no promover el enjuiciamiento y castigo para los responsables y no crear una cultura de respeto y promoción efectiva de los DDHH, no sólo priva a la sociedad del derecho a la justicia, sino que permite que en el presente y el futuro otras personas sean víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales. La impunidad se transforma así en un factor esencial de la política del Estado frente a los ciudadanos, en un componente estructural y permanente del atropello de los derechos de las personas y los pueblos.

Es así como han continuado las violaciones a los DDHH durante todos los gobiernos de la concertación. En el año 1991 se generó la ley especial de Conmutación de Pena Extrañamiento, más conocidas como Leyes Cumplido (el ministro de justicia de aquellos años). Esta ley buscaba una salida político-jurídica para un centenar de prisioneros políticos que combatieron a la tiranía, quienes debieron recurrir al indulto presidencial como una condición para acceder a la Conmutación de Pena Extrañamiento, la cual consistió en que los prisioneros políticos cumplieran sus penas en el extranjero, obligándolos a permanecer en el exilio por años, perdiendo sus derechos civiles y políticos dentro del territorio nacional.

También hasta el día de hoy, más de un centenar de chilenos están obligados a vivir en la clandestinidad tanto en nuestro país como en el extranjero, debido a la persecución política sostenida por el Estado, implementada por los tribunales civiles y militares.

Las tareas de la Oficina de Seguridad Pública, creada en el año 1992, han trascendido de la mera recopilación de información para la que supuestamente fue creada, asumiendo tareas operativas de seguimiento, traslado y hasta entrega de armas a militantes de organizaciones de izquierda potenciando delitos con el objetivo de reprimirlos. Por otro lado se legalizó en el año 1993, la detención masiva y discriminatoria que aplicaba la dictadura dirigida a los jóvenes principalmente de sectores populares, bajo la nueva ley de detención por sospecha, que afecta a un promedio de 200.000 jóvenes anualmente. Esta ley establece que se puede detener sin orden judicial y sin cometer un delito infraganti, con posibilidad de permanecer 5 días en un cuartel policial, extendiéndose a 5 días más si lo establece la policía. A la par se amparó legalmente el allanamiento sin orden de un juez.

En estos años han sido detenidos más de un centenar de hombres y mujeres por motivaciones políticas, todos procesados por tribunales civiles y militares en vigencia y por el endurecimiento de la Ley Antiterrorista y la Ley de Control de Armas y Explosivos. Todos sin derecho a una debida defensa judicial, transgrediendo tratados internacionales de DDHH, procesados simultáneamente por un mismo delito por tribunales civiles y militares, con condenas sumatorias. El año 1994 se trasladó a los presos políticos a una Cárcel de Alta Seguridad construida por el gobierno de Aylwin.

La muerte en falsos enfrentamientos ha permanecido como una política implementada por las fuerzas policiales. Una centena de jóvenes de izquierda fueron asesinados así, en estos gobiernos "democráticos". Por otro lado, la aplicación de la tortura en recintos policiales se ha hecho una práctica permanente, aunque silenciada. En los organismos de DDHH, se reciben anualmente más de 100 denuncias de maltrato policial con aplicación de corriente eléctrica, golpes en el cuerpo, sumersión en excremento y orina, en algunos casos con resultado de muerte.

A todos estos hechos, se suman cientos de casos que afectan a la población en general y particularmente a los sectores movilizados por demandas sociales,

económicas y étnicas, como es el caso de los Mapuche. Podemos agregar que el 95% de las denuncias ni siquiera son investigadas por los tribunales de justicia y los responsables continúan activos en las instituciones policiales. No son arbitrarias las acusaciones por prácticas violatorias y con recomendaciones que se le han hecho a los gobiernos concertacionistas por parte de la Comisión de DDHH de la ONU, durante estos años.

Fuente: web del FPMR

Pte



Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:

<http://www.archivo-chile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores.

© CEME web productions 2005

